

ACORD 192/2005, DE 19 DE DESEMBRE, DEL PLE DEL CONSELL DE L'AUDIOVISUAL DE CATALUNYA EN RELACIÓ AMB DETERMINATS CONTINGUTS EMESOS PER RADIO POPULAR, SOCIEDAD ANÓNIMA; RÀDIO 13 DE CATALUNYA, SOCIETAT ANÒNIMA; SOCIEDAD EDITORIAL CATALANA DE RADIO Y TELEVISIÓN, SOCIEDAD ANÒNIMA; I RÀDIO PUIGCERDÀ, SOCIETAT LIMITADA, COM A CONCESSIONARIS DEL SERVEI DE RADIODIFUSIÓ SONORA EN ONES MÈTRIQVES AMB MODULACIÓ DE FREQÜÈNCIA I EN ONA MITJANA.

ANTECEDENTS

I.- El Consell de l'Audiovisual de Catalunya ha rebut, a través de diversos mitjans, un nombre significatiu de denúncies formulades per diversos ciutadans, referides a alguns dels continguts difosos per emissores situades en territori de Catalunya. De manera general, els denunciants posaven de manifest les seves queixes sobre la forma com es duu a terme el tractament de la situació política a Catalunya, i es descriuen i valoren les pretensions dels representants polítics dels ciutadans de Catalunya en relació amb el desplegament i millora del sistema autonòmic previst en el nostre text constitucional.

II.- El Consell, en el marc de les competències que la seva Llei reguladora li atribueix a l'hora de vetllar pel respecte dels drets i les llibertats que, en l'àmbit dels mitjans de comunicació audiovisual de radiodifusió sonora, televisió i qualsevol altre sistema de transmissió de so o imatge, són reconeguts en la Constitució i en l'Estatut d'Autonomia, i, especialment, garantir el compliment de la normativa reguladora de la programació i la publicitat, i de les condicions de les concessions (article 1.2 de la Llei 2/2000, de 4 de maig), ha seleccionat i analitzat tot un seguit de continguts difosos en el marc de les emissions objecte de denúncia.

III.- Aquests continguts es corresponen amb els següents talls de veu:

Tall de veu 1:

La mañana, 14 de juny, 09:49 hores:

Locutora: “Bueno, pues vamos con una de manifestaciones. Nuestros oyentes hablan de Constantino Méndez, que no, que no se empeñe en poner dificultades, que al final no lo va a conseguir, que va a ser multitudinaria esa manifestación. Y también algún comentario de la de Salamanca.”

Trucada oient 1: “Si estos días era patético ver la manifestación de esa izquierda frente a que la derecha salga a la calle y no se esfuerce, señores, en dificultarlo. Porque va a ser que no, quieren que nos quedemos en casa pero va a ser que no. Que la calle es de todos, para eso no necesitamos un presidente del Gobierno, ya lo sabemos. Ojalá no tuviéramos que salir. Ojalá las instituciones fueran lo suficientemente fuertes y lo suficientemente democráticas para no tener que salir a la calle.”

Trucada oient 2: “Es indignante como puede llegar a manipularse la verdad. Yo estuve en Salamanca y les aseguro que fue una manifestación ejemplar. Éramos más de cien mil personas y cientos de pancartas gritando contra el movimiento del archivo y lo que ello significa en contra de la idea de España como nación. En realidad a mí me gustaría que hablaran ustedes, pero que hablaran ustedes no de un descerebrado que llevó una pancarta no se sabe guiado por quién, sino de todos los demás que estuvimos allí gritando en contra de lo que consideramos es una injusticia del PSOE.”

Jiménez Losantos: “Hombre, y recordar una cuestión en la que he insistido y insistiré todos los días: que en Cataluña se está amenazando de muerte a quien critica la política de la Generalitat, y a Maragall eso no le preocupa lo más mínimo. Y por un papelito de un imbécil en una manifestación de cien mil personas en Salamanca, pues esto sí le preocupa...”

Pedro J. Ramírez: “Hubo dos, hubo una pancarta que era de tamaño respetable y que decía lo del paredón, que la debieron llevar entre dos, y luego hubo un personaje que parecía de Mortadelo y Filemón, no lo digo por hacer propaganda de los cómics, pero es que, de verdad parecía de Mortadelo y Filemón, porque llevaba un ataúd, y esa sí que era una pancarta individual, porque era de las que se llevaba una sola persona con las dos manos, un cartel más que una pancarta, que se veía un ataúd y ponía Carod-RIP y...”

Jiménez Losantos: “Hombre, lo lógico era Caldera que dijo que antes pasarían por encima de su cadáver que llevarse el archivo.”

Pedro J. Ramírez: “A mí me parece bien, que Carod se dirija a la fiscalía para pedirle que intervenga, lo que me parece mal es que lo haga por escrito, porque si se personara en las dependencias de la sede central del ministerio público, pues así aprovecharía el fiscal de guardia, pues para interrogarle sobre su reunión de Perpiñán con ETA. Yo, vamos a ver, al margen de la opinión que se tenga sobre ese encuentro, cuando en 1987, siendo yo director de *Diario 16*, yo hice una entrevista con la cúpula de ETA (Losantos: “Y por ahí te condenarás...”), y ahí están mis preguntas de las que siempre me sentiré orgulloso (Losantos: “Es implacable, y eso que estamos ya dos minutos fuera de tiempo...”), yo a lo que voy: yo fui citado a la Audiencia Nacional y fui interrogado por el juez Garzón y por la fiscal Carmen Tagle, que luego fue asesinada, y si yo que tenía el secreto profesional del periodista como

elemento de amparo constitucional, fui interrogado al respecto, ¿por qué no lo ha sido Carod-Rovira cuando existen muchísimos más indicios de que él ha estado en tratos con la ETA puesto que, en definitiva, yo era un periodista que estaba desempeñando una labor profesional?”

Tertulià: “Pues porque estaba fundando el club al que se ha afiliado Zapatero.”

Tall de veu 2:

La mañana, 13 de juny, 06:09 hores:

Informació: “Carod-Rovira dice que piensa emprender acciones legales contra el PP y contra los organizadores de la manifestación del sábado en Salamanca por la amenazas de muerte que dice que se profirieron en esa marcha contra él. El líder de Esquerra ha tachado a los populares de chulos de barrio y de franquistas sin escrúpulos y les ha acusado de hacer escarnio de la libertad y de la democracia. Asegura que acudirá a los tribunales para hacerles callar y para acabar con la impunidad con la que amparan, dice, su odio, su racismo y su xenofobia contra Cataluña.”

Insert de Carod-Rovira (traducció al castellà): “Desde mañana Esquerra acude a los tribunales, desde mañana Esquerra usa la vía de la ley para acallar a los fascistas. Basta de impunidad, pero no sólo eso, también basta de ese odio permanente, de esa hostilidad permanente, de ese racismo permanente y de esa xenofobia permanente contra Cataluña que llevan a cabo ciertos diarios, ciertos radios, por cierto, muy poco cristianas y ciertas televisiones. ¡Ya basta!”

Losantos: “Pobrecito, tiene un ataque... Pero, vamos a ver, Roviretxe, a ver, cálmate, cálmate un poquito, ¿Qué pasa? ¿Te amenaza de muerte la facción de la Esquerra que te quiere quitar de en medio? ¡Políticamente, espero! ¡Claro! ¡El que con pistoleros se acuesta, asustado se levanta! ¿Cuántos pistoleros de Terra Lliure hay en la dirección de la Esquerra? ¿Cuántos en el grupo parlamentario? ¿Cuántos en el Ayuntamiento? ¿Cuántos en la Generalitat? ¿Cuántos en el Gobierno de Cataluña? Estaría bien hacer el censo. De algunos los conocemos, conocemos sus andanzas, y otros no. El otro día ...pero tiene gracia, además, que estos sujetos hablen del odio y del racismo y de la xenofobia. ¡Ellos, cuyo único negocio es precisamente el odio y la xenofobia! Ellos, que son expertos, en la línea de Pujol, por cierto, aquí a cada cual lo suyo, en eso que llamaba el manifiesto recientemente publicado de intelectuales catalanes, la pedagogía del odio. Roviretxe: ellos, ciertas televisiones habla de odio. ¡Ellos! Fíjense cómo serán, claro, si es que vienen de la pistola, muchos vienen de la pistola, y otros de la sombra de la pistola. La Esquerra esta no es la histórica, que por otra parte era criminal, ahora hablaremos del golpismo de la Esquerra. No, es que la semana pasada Bargalló, que creo que es el segundo del gobierno de Maragall, en el caso de que haya gobierno y haya un primero, recordaba a los intelectuales del manifiesto que hace años algunos firmamos un manifiesto y hubo toda clase de atentados, amenazas, etc., porque allí se respeta mucho la libertad, en Catalunya, esto respeta mucho la libertad, a tiro limpio con el que les lleva la contraria, así es esta basura.”

Tall de veu 3:

La linterna, 24 d'octubre, 20:06 hores:

“En apenas unas horas se ha confirmado que la mayor amenaza para la democracia desde la aprobación de la Constitución de 1978 la constituye el proyecto del nuevo Estatuto catalán. Sin ánimo de ser exhaustivos, señalemos alguna de las razones:

Primera: el nuevo Estatuto catalán tiene un fuerte color imperialista, hasta el punto de que, como quedó demostrado el domingo, Cataluña se reserva el derecho de anexionarse las partes de España en las que, según los nacionalistas catalanes, se habla catalán. Valencia y las Baleares serían así para los nacionalistas catalanes lo mismo que para el nacionalista Adolf Hitler eran Austria y Checoslovaquia.

Segundo: el nuevo Estatuto catalán establece un derecho de veto sobre las decisiones del Parlamento español de tal manera que España quedará convertida en una colonia de los nacionalistas catalanes. Ni los presupuestos españoles, ni los tratados internacionales firmados por España, ni sus planes de obras públicas, ni sus intervenciones militares podrán llevarse a cabo sin la autorización del Parlamento catalán. En otras palabras, España será con respecto a Cataluña lo mismo que el Líbano con relación a Francia antes de la II Guerra Mundial, una colonia, un simple protectorado.

Tercero: el nuevo Estatuto catalán aniquila el orden constitucional despedazando la única nación de la que habla la Constitución para convertir España en un Estado plurinacional.

Cuarto: el nuevo Estatuto catalán establece una verdadera dictadura económica de Cataluña sobre el resto de España, a la que convierte en el mercado tercermundista de sus productos.

Quinto: el nuevo Estatuto catalán significa el final de la Constitución y las libertades democráticas para sustituirlas por un régimen nacional socialista.

Sexto: el nuevo Estatuto catalán es el cumplimiento del acuerdo del Tinell, en virtud del cual el partido socialista concluía con los nacionalistas un nuevo pacto de Estella, esta vez a la catalana, destinado a convertir al PP en un partido de parias excluidos de la vida política

Y séptimo: el nuevo Estatuto catalán, desgraciadamente, no es combatido como sería de esperar por el Gobierno que preside don José Luis Rodríguez Zapatero. Muy al contrario, ha salido adelante con el apoyo personal del presidente del Gobierno y constituye uno de sus instrumentos privilegiados para perpetuarse en el poder, aún a costa de despedazar a una nación.

Ésa es la triste realidad. Y como en la época de Gesipo, el del copete, sólo caben dos alternativas: o como ciudadanos libres defendemos la democracia frente a las ansias de expansión de los nacionalistas o nos resignamos a convertirnos en sus esclavos. Los esclavos que llevarán vestiduras de luto, que se transformarán en una colonia de Cataluña y que le entregarán el fruto de su trabajo a través de los impuestos. Ésa es la verdadera disyuntiva, el resto, es pura palabrería.”

Tall de veu 4:

La mañana, 27 de setembre, 06:33 hores:

“Bien, y la prueba de lo que está pasando: terrorismo contra el PP. Unos lo marginan y otros le ponen bombas. Otros que son los mismos... Otros, que son los mismos. ERC está compuesta por terroristas sin arrepentir. Y éstos, a su vez, tienen un entorno, criminal, del que siempre se ha nutrido, al que cultivan, al que miman, de donde vienen. ¿Dónde está la diferencia? Pues no lo sabemos, si un día lo sabemos se lo contamos. Ahora, otra bomba. Ahora ya, no contra la sede del PP, no, no, ahora ya contra la familia de los padres de uno de los dirigentes del PP. Encima como son unos terroristas tan incompetentes, se equivocan de puerta. Ya no sabe uno si lamentarlo o alegrarse, claro. El hecho es siniestro. Estas son las libertades de Cataluña que defiende Maragall. Y ésta es la Cataluña del futuro de Roviretxe. Ésta para la que quieren hacer ese famoso Estatuto que tanto excita el señor Blanco.” (Tot fa referència a la notícia sobre una explosió a l'edifici del costat de la casa dels pares del president del PP de Badalona, Xavier Garcia Albiol.)

Tall de veu 5:

La mañana, 3 d'octubre, 06:13 hores:

“Pues hoy Mariano Rajoy coge el toro por los cuernos y plantea varias cuestiones, que les vamos a contar. Pero las dos primeras, las substanciales. Lo que hay que blindar en España es España, las competencias exclusivas del Estado y para esto hay que reformar la Constitución, vamos a reformar la Constitución. Y además vamos a cambiar la Ley Electoral para acabar de una vez con esa hipoteca de que un partido con el 2% de los votos mande en la política nacional, siento un partido abiertamente antiespañol, ofensivamente antiespañol y escandalosamente separatista. Y además, amigo de la ETA, socio de la ETA, cómplice de la ETA. Estas son las dos propuestas fundamentales. Reforma de la Constitución para blindar las competencias del Estado, yo creo que aún se queda corto, pero en fin, esto es un debate que se ha abierto, y además reforma de la Ley Electoral para acabar con la hipoteca de los nacionalistas.”

Tall de veu 6:

La mañana, 25 d'octubre, 06:29 hores:

“No se puede actuar como si no hubiera pasado lo que ha pasado: que es que Zapatero nos ha traído un Estatuto violentamente anticonstitucional. ¿La intención es buena?, pues sí, no quiero dudarlo, además que ahora que va a ser abuelo por enésima vez, se lo aceptamos. Pero las instituciones, ninguna ha funcionado, la prueba es que hemos llegado donde hemos llegado. Es más, las instituciones no funciona ninguna. Y las pocas que podrían funcionar, como el Consejo de Estado, no se le consulta... ¿Para qué lo ha hecho Zapatero? Porque necesita la tregua de la ETA. ¿Para qué? Para cambiar de régimen sin que se note y vendérselo, como oh, la paz, la paz de los cementerios, o la paz de la siesta. ¿Pero qué pasa con la ETA? Ah amigo, que es que la ETA no es Roviretxe, la ETA manda en Roviretxe,

Roviretxe no manda en la ETA. Y ahora dice que lo suyo es más importante que lo de Cataluña.”

Informació “La banda terrorista publica hoy un comunicado en el *Gara* en el que rechaza cualquier comparación entre el País Vasco y Cataluña y advierte al PNV y al PSOE que no aceptará ninguna reforma estatutaria similar a la pactada en Barcelona. Dice que el marco autonómico está muerto, rechaza lo que tacha como insubstanciales competencias y apela a la autodeterminación. Además advierte de las consecuencias de construir un nuevo pacto autonómico porque eso solo alimentará el conflicto, dice, y prolongará el enfrentamiento. La banda, además reivindica los tres últimos atentados, entre ellos la colocación de dos lanzagranadas en Zaragoza que la Guardia Civil halló ayer después de dos semanas gracias a un plano insertado en *Gara*. Estaban tres kilómetros y medio más lejos de lo señalado inicialmente.”

Tall de veu 7:

La mañana, 6 d'octubre, 06:23 hores:

“Entre las cosas que dijo Roviretxe, está que hay que cargarse los...el acuerdo de España con la Santa Sede porque dice que es medieval, y que hay que cargárselo porque ha llegado gente de otras religiones. Claro: moros, musulmanes. Porque los musulmanes no nos retrotraen a la Edad Media, no, no, no. O sea el Islam nos acerca mucho a la modernidad, al liberalismo, a la democracia.... en cambio los países democráticos y liberales que ¡oh, sorpresa!, todos son cristianos, estos no, estos no... también Israel es una democracia, pero es adonde fue a burlarse con la corona de espinas Roviretxe con Maragall. Estos, que piden respeto, y no respetan absolutamente nada. Roviretxe, que es el socio de la ETA en Perpiñán. Y que viene a Madrid como si viniera a traernos regalitos. Es... y los ves en las televisiones, a estos que no llamaré colegas, porque yo de estos colegas no soy de nada, haciéndole vamos, pero vamos oooh qué bien, qué bien, gracias por venir, qué honor, qué inmenso honor, pero por favor... ¡Pero si son los de Perpiñán! ¡Si son los que han pactado que ETA mate en una parte de España y en otra no! ¿Pero esto qué es? Uy, pero a lo mejor vamos a subir un 1% de audiencia... de audiencia, la que yo te diga...”

Tall de veu 8:

La linterna, 4 d'octubre, 21:26 hores:

(En referència a la proposta de llei d'Esquerra Republicana de Catalunya que plantejava l'oficialitat de català, euskera i gallec a tot l'Estat.)

Informació: “Mientras tanto, el portavoz de Esquerra, Joan Tardà, ha acusado al PP de poner todos medios para que la propuesta de ley no se lleve a debate y también ha asegurado que su grupo ya tiene el compromiso del Partido Socialista de apoyar la tramitación.”

“Ya lo han oído ustedes, el señor Tardà, que gusta de señalar y apuntar a determinadas personas dentro del estilo de los camisas negras, como las que lleva la gente de Esquerra en el Parlamento, pues evidentemente ha dicho la verdad, cuando ha presentado una propuesta que es abiertamente anticonstitucional, el Partido Popular se ha opuesto a ella y, lo que es

gravísimo, es que el Partido Socialista parece ser que lo va a apoyar. Claro como sigamos en esta línea de ir cambiando la Constitución por votaciones de mayoría simple en el Congreso, al final de la Constitución no va a quedar absolutamente nada”.

Tall de veu 9

La mañana, 29 de setembre, 07:26 hores:

“En los grandes periódicos de Madrid: el término nación, Cataluña se declara nación, etc. *El Periódico*, *La Vanguardia*: no viene. ¿Y saben por qué no va? Primero, porque eso es una dictadura informativa. Y segundo, porque es que la gente en Cataluña está en contra. Es que una casta dirigente, corrompida y corruptora, que gobierna de espaldas al pueblo, no expresa en absoluto ninguna necesidad, ninguna voluntad de la gente corriente de Cataluña. ¡Mentira! ¡Mentira! En todas las encuestas les importa el Estatuto, nada. Según una de *La Vanguardia* sólo el 2% considera que el Estatuto es importante en sus vidas. Según *El Periódico de Cataluña*, que siempre hincha más el perro, pues sería el 20%. La inmensa mayoría de la población de Cataluña ni sabe ni quiere saber. Pero por si acaso, mejor que no se entere. Así que esto de que han declarado a Cataluña nación y a España no, no aparece hoy en la portada de los dos grandes periódicos de Cataluña.”

Tall de veu 10:

La mañana, 29 de setembre, 08:20 hores:

“Todos los periódicos, hasta *El País*, sacan: nación, Cataluña, el Parlamento aprueba nación.... Porque eso significa la liquidación de España. Bueno, pues ni en *La Vanguardia* ni en *El Periódico* aparece en portada... Es que no aparece. ¿Y por qué? Por algo que insistimos siempre. Da igual, luego dirán lo que quieran. Pero la gente normal de Cataluña vive absolutamente de espaldas a esta casta cleptocrática, esta casta separatista y esta casta que engaña a la gente. Y cuando digo casta, me refiero a casta, no es ni siquiera una clase social, primero porque tienen poca clase y luego porque operan como una secta, como una casta. Y da lo mismo políticos que periodistas. Casi son peores los periodistas, los presuntos periodistas, que los políticos. ¿Por qué engañan a la gente? ¿Por qué no dicen en la prensa de Cataluña hoy que Cataluña se declara nación y por lo tanto rompe la Constitución española? Porque la gente en Cataluña está en contra. ¡Pero masivamente en contra!”

Tall de veu 11

La mañana, 30 de setembre, 07:28 hores:

“Por supuesto que esta independencia a corto o medio plazo, que es a lo que vamos, más luego el imperialismo tradicional, en la Comunidad Valenciana y en las Baleares y en parte de Aragón, pues naturalmente sólo puede abocar a la ruina, al aislamiento primero y a la ruina después de Cataluña. ¿Pero a ellos qué más les da? ¿A ellos qué más les da? Es una casta, pues como en el tercer mundo, cleptocrática, iluminada... iluminada, excepto a la hora de cobrar, que son esclarecidos. Y quien dice cobrar dice llevarse.”

Tall de veu 12

La mañana, 3 d'octubre, 06:43 hores:

“Por eso cuando se llenan la boca “¡Cataluña ha dicho!”. No hombre no, la casta dirigente nacionalista de Cataluña, que tiene absolutamente fuera de la libertad política y de la democracia real a la población, ha decidido. La población de Cataluña no piensa lo que piensa Mas o Roviretxe o Maragall. Ni mucho menos. Pero ni muchísimo menos. Es un Estatuto hecho a espaldas del pueblo, por una clase política y mediática que tiene la caradura que cuando se hunde el Carmelo decir que es culpa de la corrupción y luego tapar el hundimiento del Carmelo y además la corrupción. Por supuesto, la culpa de todo la tiene Madrid. Ayer, qué espectáculo la prensa de Barcelona. Bueno, ya saben que ocultaron a los lectores, La Vanguardia y El Periódico, que habían puesto el termino nación como artículo primero. Lo ocultaron, lo ocultaron, los dos, en su portada. Todos los periódicos de Madrid: Cataluña se declara nación. ¡Y los periódicos de Barcelona no decían nada! ¡Pero si es que eso es una dictadura, hombre!. Ayer diciendo: no se puede tolerar que algunos medios critiquen a la clase política o periodística catalana... ¡Pero si os criticáis vosotros solos! ¡Si dais pena! Bueno, pena, no, pena da la gente de Cataluña. ¿No se puede tolerar? ¿Y qué vais a hacer, vais a mandar a la Brunete o qué?”

Tall de veu 13

La linterna, 3 d'octubre, 20:05 hores:

“En todos y cada uno de los casos mencionados, Melilla, Cataluña y Vascongadas, el estado de derecho, el orden constitucional, el mero y simple sentido común exigía que no se llegara a esa situación. Porque no podemos consentir que se violen impunemente nuestras fronteras. No podemos tolerar la burla de que los encargados de defenderlas no puedan ni siquiera defenderse a sí mismos. No podemos aceptar que la oligarquía nacionalista decida desgajar un trozo de España para convertirlo en su cortijo. No podemos claudicar ante la idea de que un pequeño grupo de políticos borrachos de poder digan al resto de España lo que tiene que ser y lo que tiene que hacer. Y no podemos capitular, ante el hecho verdaderamente vergonzoso, de que una banda de terroristas que ha asesinado a un millar de españoles tome las calles en una parte de España.”

Tall de veu 14

La linterna, 4 d'octubre, 20:57 hores:

Tertulià: “Además desde el punto de vista de Cataluña, vista como ente propio, es que establece un modelo de sociedad, de economía tan intervenido, tan burocratizado, tan reglamentado, tan intervencionista, que no puede llevar más que a una situación, digamos, desde el punto de vista social y económico pues muy negativa...”

César Vidal: “Lo que usted dice además, es cierto y a mí me parece muy importante. El problema es que es un sistema tan absolutamente mediatizado... Claro, al final el fascismo es el socialismo nacional. Esto es una cuestión histórica. Pero claro, es que al final es un régimen

casi corporativo el que crea. Es decir, a mí me recuerda leyendo el Estatuto, muchísimo a la Italia de Mussolini, extraordinariamente.”

Tall de veu 15:

La linterna, 4 d'octubre, 20:12 hores:

“Al señor Tardà, al que le gusta jugar al gran inquisidor y de vez en cuando señala autores concretos a los que hay que censurar. Lo cual demuestra que en el fondo es un verdadero fascista, porque realmente no se puede denominar de otra manera a quien se dedica a censurar al prójimo. Se empieza señalando autores, como él ha hecho en el Congreso en más de una ocasión, y después se pasa a quemar los libros en una pila. Y ésa, desgraciadamente, es la táctica del señor Tardà. El señor Tardà, además, olvida algo muy importante y es que la soberanía nacional no reside en los votantes catalanes, la soberanía nacional según la Constitución reside en toda la nación española. Y lo que no puede pretender, porque eso es fascismo puro, es que lo que decidan los nacionalistas catalanes tiene que ser un trágala que acepten el resto de los españoles. Que a lo tonto a lo tonto, son seis veces prácticamente la población de Cataluña. Ahora, eso sí que al señor Tardà le pide el cuerpo actuar de gran inquisidor y actuar de trágala y que todos pasemos por el aro, no cabe duda. Pero eso no es democrático, eso es digno de la tradición histórica de ERC.”

Tall de veu 16

La linterna, 4 d'octubre, 20:11 hores

Informació: “El portavoz del PSC, Miquel Iceta, ha asegurado hoy en declaraciones a RAC-1 que la delegación catalana no tendría que ceder en nada en financiación. Y además ha respondido con la siguiente reflexión a las críticas que ha recibido el nuevo texto.”

Insert Miquel Iceta (traducció al castellà): “Allí da miedo. Y es que Cataluña cuando se mueve da miedo porque es muy potente, porque no es una excepción y porque Cataluña arrastra a España, cosa que no sucede con el País Vasco. Por lo tanto, nadie tendría ningún tipo de temor si esto fuera una discusión en el País Vasco, pero en cambio sí sucede en Cataluña porque hay más estatutos que están a las puertas de una reforma y porque en Cataluña somos más.”

César Vidal: “Bueno, lo del señor Iceta es de un complejo de inferioridad disfrazado de superioridad digno de algún partido de camisas pardas del periodo de entreguerras. Son esas afirmaciones de superioridad, de nacionalismo canijo desprovisto de raíces históricas que encima, se lo acaba creyendo. Es como cuando el matón de la clase de pronto decide que es el más guapo, el más alto y el más valiente de todos, claro hasta que le inflan el resto de los compañeros. Pero efectivamente ésta es la idea. No, a Cataluña no la tenemos miedo. Nunca la hemos tenido miedo, entre otras cosas porque es una parte de España a la que queremos entrañablemente. Y los nacionalistas catalanes, miedo tampoco nos inspiran, ahora, los sentimientos que nos producen posiblemente son todavía menos positivos.”

Tall de veu 17:***La mañana, 26 d'octubre, 07:27 hores:***

“Ah, también le atizaron a Endesa y al PP a propósito de la OPA, porque la Caja, la Caixa no tiene nada que ver en la OPA, no, solamente es la dueña de Gas Natural... Solamente... ¡Pero es que encima nos toman por imbéciles! Vamos a ver si se entera el señor Fornesa, que como es muy mayor a lo mejor no se enteró, y mira que se lo explicó bien Mariano Rajoy... Con esto de la OPA de Endesa y con el Estatuto de Cataluña, pasa como con la boda del príncipe y Letizia: nada podrá ser como antes. Para bien y para mal nada podrá ser como antes. El Estatuto de Cataluña ha demostrado que esto es la independencia y además que quieren convertir a España en un protectorado de la Cataluña independiente. Y mire don Ricardo: no. O sea, no. No. Porque además ustedes tienen un virus totalitario instilado en la sociedad catalana, que es el nacionalismo. Y si eso se expande por toda España, y Valencia es otra Cataluña, y Baleares es otra Cataluña, y Aragón otra Cataluña, y Madrid otra Cataluña, se acabó la libertad en España. No solamente en los negocios, es que no hay libertades, como no la hay allí. Sí, usted tiene mucha libertad, para decir lo que le gusta oír a Maragall. Vale más media España libre, que no una España grande, que ¿qué, qué? ¿una colonia de La Caixa? Pues no, pues no. Hemos pasado épocas peores, hubo un momento que toda España menos Cádiz estaba ocupada por las tropas de Napoleón y era un ejército un poco más serio que el de La Caixa.”

Tall de veu 18***La mañana, 7 d'octubre, 07:41 hores:***

“O sea, los muertos de Guadalajara, no hay que investigarlos. Esos son muertos de tercera. Como aquel célebre dicho del periódico de final del XIX: hubo un accidente ferroviario, afortunadamente todos los muertos eran de tercera. Bueno, afortunadamente, claro, mientras mueran en Castilla pues... Qué vergüenza, qué asco, qué bochorno, qué nauseas producen estos tíos. Cada uno de ellos, estos tíos del PSOE, sus socios, los separatistas, etc., representan a todos los españoles, no representan a su distrito, a todos los españoles. Y a estos tíos les da igual que a once muchachos los mandaran a morir, les da igual porque son españoles de tercera; mejor dicho, porque son españoles y, por lo tanto, ciudadanos de tercera. Ahora, si pide dinero Cataluña, el doble. Que pide el País Vasco, el triple. Lo que quieran, lo que quieran. ¡Tú pide, que aquí está ZP que no es patriota!”

Tall de veu 19***La mañana, 29 de setembre, 06:12 hores:***

Informació: “El ministro José Bono se encomienda, dice, a la Virgen, para que la reforma que llegue al Congreso desde Cataluña no contenga aspectos inconstitucionales. Zapatero se limita a decir que la democracia es así, que tiene una parte imprevisible.”

Jiménez Losantos: “Efectivamente, era imprevisible que un señor como Zapatero llegara a la presidencia del Gobierno. Era imprevisible que un partido y un grupo mediático como el de Polanco tuvieran la desenvoltura, por no decir la desvergüenza, de utilizar de una manera tan

macabra y miserable la masacre del 11-M, que todavía el Gobierno se niega a investigar, y con razón. Era absolutamente imprevisible que una colección de gente tan poco letrada y en algunos casos analfabetos funcionales llegaran a ministros. Y era absolutamente imprevisible que el presidente del Gobierno de España se pusiera a apuñalar a España para mantener el apoyo de grupitos separatistas en el poder.”

Tall de veu 20

La mañana, 6 d'octubre, 06:20 hores:

“Claro, es que el preámbulo lo ha hecho un distinguido bobo llamado Rubert de Ventós, que es el intelectual que tiene en la mesilla de noche Maragall. Y claro, con esta colección de analfabetos, que no tienen ni idea de historia ni respeto por los demás, pues claro, pasa lo que pasa...”

Tall de veu 21

La mañana, 27 d'octubre, 06:07 hores:

“Por supuesto esta campaña contra la COPE que adquiere en Cataluña niveles grotescos, es una cosa verdaderamente... en fin, a mí me divierten. Es que estos idiotas, además piensan que, cuando a uno le insultan (y a mí me insultan todos los días, pero bueno, así al por mayor), pero si es que a mí me divierte mucho ver a los malos excitados contra mí me produce un gran placer espiritual. Digo “mira, mira, como atacan los malos... debo estar haciendo algo bien”. O sea que sigue, Montilla, que me complace, y sigue, Rubalcaba, que me encanta oírte.”

Tall de veu 22

La mañana, 27 d'octubre, 07:27 hores:

“Ah, y si nos quieres cerrar las emisoras para dárselas a Polanco, vas a ver entonces la cantidad de productos catalanes que van a tener problemas para venderse. Porque nos vas a tener que cerrar en toda España. En fin, nos vamos a las noticias locales, pero, aviso a navegantes: si quieren cerrar la Cope en Cataluña el que la cierra es Zapatero, con las máximas complicidades. Es Zapatero. Para que nadie denuncie que se está cargando la nación y la Constitución. Pero que luego no se quejen algunos, ¿eh? ni empresarios, ni políticos. Porque yo no sé si Montilla quiere fundar otra vez el GAL – él es del partido de Fiesla y del GAL—para matar periodistas incómodos o van a montar otra vez la máquina como lo del vídeo de Pedro J, porque son ellos. ”

Tall de veu 23:

La mañana, 4 d'octubre, 07:37 hores:

Informació: “El partido socialista ha anunciado que va a crear una comisión de expertos liderada por Rubalcaba para analizar la reforma estatutaria de Cataluña. El Gobierno reconoce que hay puntos de dudosa constitucionalidad. Mientras el jefe del Estado Mayor de la defensa

decía ayer que los militares están preocupados por la unidad de España reflejada en la Constitución. Montilla ha respondido que los militares no siempre han respetado la carta magna. Bono, por su parte, respaldó al GEMAD y pidió al PP que se sume al consenso para aprobar el Estatuto. ”

Jiménez Losantos: “Está bien lo de Montilla: es verdad que los militares no siempre, los socialistas nunca. Nunca. La historia del socialismo español desde Pablo Iglesias hasta el 13-M es la apoteosis del golpe de estado permanente. Cuando podían por lo militar, cuando no por lo civil y cuando no, por lo mediático, que es la última novedad.”

Tall de veu 24:

La linterna, 7 d'octubre, 20:07 hores:

“Muy posiblemente el mayor logro de Felipe González como secretario general del PSOE fue arrancarlo del dogmatismo marxista y arrastrarlo hacia posiciones semejantes a la del partido social-demócrata alemán. Y es que la historia del Partido Socialista es una de las más siniestras de la contemporaneidad española. Y es que, a lo largo de casi un siglo, se caracterizó casi siempre por la lucha contra los sistemas parlamentarios, por la falta de respeto hacia la legalidad, por el apoyo al golpismo y por un sectarismo totalitario.”

IV.- D'acord amb la informació de què disposa el Consell de l'Audiovisual de Catalunya, els esmentats continguts han estat difosos, en les dates i hores i en el marc dels programes que es fan constar a l'apartat anterior, pels següents operadors:

- a) COPE Figueres (Freqüència 89,4 MHz), en règim de gestió indirecta del servei de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència. L'empresa titular de la concessió és Radio Popular, SA.
- b) COPE Manresa (Freqüència 92,7 MHz), en règim de gestió indirecta del servei de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència. L'empresa titular de la concessió és Ràdio 13 de Catalunya, SA.
- c) COPE Tarragona (Freqüència 93,5 MHz), en règim de gestió indirecta del servei de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència. L'empresa titular de la concessió és Ràdio 13 de Catalunya, SA.
- d) COPE Barcelona (Freqüència 102,0 MHz), en règim de gestió indirecta del servei de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència. L'empresa titular de la concessió és Sociedad Editorial Catalana de Televisión y Radio, SA.



- e) COPE Puigcerdà (Freqüència 92,00 MHz), en règim de gestió indirecta del servei de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència. L'empresa titular de la concessió és Ràdio Puigcerdà, SL.
- f) COPE Figueres (Freqüència 1269 OM), en règim de gestió indirecta del servei de radiodifusió sonora en ona mitjana. L'empresa titular de la concessió és Radio Popular, SA.
- g) COPE Reus (Freqüència 1143 OM), en règim de gestió indirecta del servei de radiodifusió sonora en ona mitjana. L'empresa titular de la concessió és Radio Popular, SA.
- h) COPE Lleida (Freqüència 1224 OM), en règim de gestió indirecta del servei de radiodifusió sonora en ona mitjana. L'empresa titular de la concessió és Radio Popular, SA.
- i) COPE Miramar (Freqüència 783 OM), en règim de gestió indirecta del servei de radiodifusió sonora en ona mitjana. L'empresa titular de la concessió és Radio Popular, SA.

V.- En data 16 de novembre de 2005 el Ple del Consell adopta l'Acord 160/2005 en virtut del qual s'aprova la proposta d'acord en relació amb determinats continguts emesos per Radio Popular, SA, Ràdio 13 de Catalunya, SA, Sociedad Editorial de Radio y Televisión, SA, i Ràdio Puigcerdà, SL, com a concessionàries del servei de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència i en ona mitjana, tot atorgant als interessats un termini de quinze dies per a la formulació de les al·legacions que estimin pertinents.

VI.- En data 1 de desembre de 2005, el senyor Carlos Ram de Viu de Sivatte, en representació de les concessionàries esmentades en el paràgraf anterior, presenta davant del Consell un escrit d'al·legacions a la proposta d'acord notificada.

FONAMENTS

PRIMER.- RESPOSTA A LES AL·LEGACIONS PRESENTADES EN DATA 1 DE DESEMBRE DE 2005 PEL SENYOR RAM DE VIU DE SIVATTE, EN REPRESENTACIÓ DE RADIO POPULAR, SA, RÀDIO 13 DE CATALUNYA, SA,

EDITORIAL CATALANA DE RADIO Y TELEVISIÓN, SA I RÀDIO PUIGCERDÀ, SL.

En data 1 de desembre de 2005, el senyor Ram de Viu de Sivatte presenta, en representació de Radio Popular, SA, Ràdio 13 de Catalunya, Editorial Catalana de Radio i Televisión, SA i Radio Puigcerdà, SL, un escrit d'al·legacions a la proposta d'acord del Consell en relació amb determinats continguts difosos per les entitats esmentades, la qual els fou oportunament notificada.

Cal procedir, en aquest moment, a donar resposta als diferents arguments i consideracions que es posen de manifest en el marc de l'esmentat escrit.

1.- Sobre la competència del Consell per declarar que Radio Popular, SA; Ràdio 13 de Catalunya, SA; Editorial Catalana de Radio y Televisión, SA, i Ràdio Puigcerdà, SL, com a entitats comercials concessionàries del servei de radiodifusió sonora en ona mitjana i en ones mètriques amb modulació de freqüència, han incorregut en una vulneració dels límits constitucionals a l'exercici legítim dels drets fonamentals a la llibertat d'informació i expressió.

Sens perjudici que la competència del Consell per dur a terme l'esmentada declaració (així com per acordar les conseqüències jurídiques que se'n deriven) va ser abastament argumentada en el marc de la proposta d'acord notificada als interessats; i sens perjudici, igualment, que aquesta argumentació es reculli en el si del present acord definitiu, esdevé necessari, en vista de les al·legacions efectuades per part dels interessats, afegir-hi alguna consideració.

L'eix central de l'argumentació dels interessats consisteix a recriminar al Consell el fet, es diu, d'haver-se erigit en l'organisme responsable de garantir o fins i tot de controlar l'adequat exercici, per part dels mitjans de comunicació, dels drets fonamentals reconeguts a l'article 20 CE. Concretament, s'assenyala que dins del nostre sistema constitucional no resulta possible que un òrgan no integrat dins del poder judicial pugui exercir cap mena de control sobre el grau de respecte, per part dels particulars, dels límits dels drets fonamentals en el seu exercici.

Contràriament al que pretenen els interessats, el cert és que el Consell exerceix un gruix de competències, atribuïdes per la Llei, que van força més enllà de les limitades atribucions de caràcter consultiu que de manera pràcticament exclusiva aquells li atorguen –a banda del que anomenen altres competències “más difusas” (*sic*).

Tal com de manera clara i expressa estableix l'article 1.2 de la Llei 2/2000, el Consell vetlla pel respecte dels drets i les llibertats reconeguts a la Constitució i a l'Estatut, relatius o vinculats a l'exercici d'activitats de comunicació audiovisual, així com de la resta de la normativa reguladora de la programació i la publicitat, i de la normativa comunitària i els tractats internacionals en la matèria. Ens especifica igualment el citat article 1.2 que el paràmetre de control per part del Consell de les activitats dels mitjans de comunicació audiovisual no el constitueix només el conjunt de fonts del dret en la matèria, sinó que les seves competències inclouen igualment la verificació de l'adequat compliment de les obligacions i condicions que formin part del corresponent contracte o relació jurídica administrativa de caràcter concessional, en cas d'existir.

En el marc d'aquestes atribucions competencials de caràcter general, la Llei 2/2000 inclou a continuació tot un seguit de preceptes concrets en el marc dels quals s'acaben de desenvolupar i explicitar les competències del Consell com a organisme de l'Administració activa i no exclusivament de naturalesa consultiva. En aquest sentit, l'article 10 de la Llei, al llarg dels seus diversos apartats, no només emfatitza les atribucions del Consell en relació amb el control del compliment, per part dels mitjans corresponents, dels seus deures constitucionals, legals i, si escau, concessionals, sinó que el dota de tot un seguit de potestats en aquells casos en què es pugui determinar l'existència d'algun tipus de vulneració dels aspectes tot just esmentats.

En aquest sentit, i de manera destacada, l'article 10.g) (en connexió amb l'article 11) atribueix al Consell competències sancionadores en aquells casos en què l'incompliment en qüestió consisteixi en una conducta tipificada com a infracció per part de la norma corresponent, així com, si escau (article 10.n)), la capacitat, un cop apreciada i declarada una determinada vulneració de la normativa aplicable, de posar-la en coneixement de les altres autoritats

reguladores o les altres Administracions públiques que siguin competents per tal d'adoptar les mesures derivades de la dita vulneració, incloent, com no podia ser d'una altra manera, el Ministeri Fiscal.

De tota manera, i sens perjudici que les conseqüències jurídiques poden ser, com s'ha vist, en cada cas diverses, el cert és que l'atribució reiterada per part de la Llei, en favor del Consell, de competències pel que fa al deure de vetllar pel respecte, per part dels mitjans de comunicació que es dirigeixen al públic de Catalunya, de les seves diverses obligacions, l'erigeix en la primera i principal autoritat catalana dins l'àmbit de la comunicació audiovisual. I això suposa que el Consell ostenta, abans que res, la competència per constatar el grau de compliment i respecte, per part dels mitjans, de les seves responsabilitats, així com per declarar o posar de manifest (fins i tot, i sobretot, públicament) les omissions o vulneracions que en aquest camp es puguin produir, independentment de l'adopció de qualsevol altra mesura o decisió que sigui procedent. Aquesta funció es troba directament relacionada amb el fet que es tracta d'un organisme de caràcter independent, i clarament en sintonia amb la posició, les competències i el prestigi que aquest tipus d'autoritats (i no només en la regulació de la comunicació audiovisual) tenen en la resta de països d'Europa i fins i tot del món occidental.

Cal entrar ara a tractar la qüestió relativa a la capacitat del Consell per prendre decisions sobre el grau de correcció o respecte dels límits constitucionals en relació amb l'exercici, per part de subjectes privats, dels seus drets constitucionals a la llibertat d'informació i a la llibertat d'expressió.

Resulta sorprenent l'argumentació formulada pels interessats en el sentit que l'adopció de decisions que afecten o fins i tot verifiquen, directament o indirecta, el correcte exercici, per part de particulars, de drets fonamentals, se situaria fora de les competències de les Administracions públiques, i que en realitat ens trobaríem davant d'un àmbit que correspondria en monopoli als òrgans integrats dins del poder judicial.

Cal dir que si això fos així, bona part de l'activitat habitualment desenvolupada per les nostres Administracions públiques no podria dur-se a terme.

I és que en la mesura que la Constitució no constitueix un mer decàleg de principis, sinó una norma jurídica que obliga el conjunt dels poders públics (article 9.1), no existeix cap poder públic, òrgan o organisme (ni tan sols el Tribunal Constitucional) que n'ostenti el monopoli d'interpretació i aplicació, sinó que totes i cadascuna de les institucions i poders de l'Estat, des de llur concreta posició dins del sistema polític i institucional, són els destinataris del conjunt de mandats que s'inclouen en la norma fonamental. Així mateix, dins del seu marc de competències i atribucions, i sempre sens perjudici del complet sistema d'equilibris i controls entre els poders públics constitucionalment previst, correspon també al conjunt d'institucions de l'Estat vetllar perquè la Constitució sigui respectada i, més concretament, perquè els drets fonamentals i les llibertats públiques siguin exercits d'acord amb els paràmetres i límits establerts.

De manera particular, i en el cas dels diversos òrgans i organismes que integren les Administracions públiques, entre els quals es troba, com és prou conegut, el Consell de l'Audiovisual de Catalunya (institució que, per cert, mai no ha tingut cap mena de vocació d'autoatribuir-se la naturalesa d'òrgan de caràcter jurisdiccional), cal recordar que l'article 106.1 CE sotmet, sense distincions, el conjunt de llur activitat al control per part dels Tribunals, la qual cosa suposa en la pràctica, de manera principal, que aquest control el portin a terme els òrgans que s'integren dins la jurisdicció contenciosa administrativa.

Aquest control abastarà també, com no podria ser d'una altra manera, les decisions administratives que puguin afectar l'esfera de drets i llibertats constitucionalment protegits dels ciutadans. De fet, aquest és precisament el sentit de l'article 53.2 CE quan assenyala que *“cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección Primera del Capítulo II ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad, y en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional”*. Resulta sorprenent que els interessats pretenguin veure en aquest precepte la previsió d'un monopoli jurisdiccional en matèria de fiscalització de l'exercici i protecció dels drets fonamentals, quan és evident que preveu la posició privilegiada de Jutges i Tribunals en la interpretació de l'abast i la tutela dels esmentats drets (sens perjudici, lògicament, de la possibilitat de la intervenció del

Tribunal Constitucional a través del mecanisme processal del recurs d'empara), i, en conseqüència, el dret de qualsevol ciutadà a sol·licitar la tutela jurisdiccional en aquells supòsits en què entengui que una determinada decisió emanada d'un poder públic (especialment de l'Administració) és fruit d'una incorrecta aplicació o reconeixement de l'abast dels drets fonamentals i les llibertats públiques.

Si fem un cop d'ull al nostre ordenament jurídic, podem comprovar com, sempre sota el control dels Tribunals, i comptant així mateix amb la garantia última de la sol·licitud d'empara davant del Tribunal Constitucional, l'atribució a les Administracions públiques de potestats que suposen, directament o indirecta, la determinació de l'abast de l'exercici legítim d'un dret fonamental, o fins i tot, la decisió, en un cas concret, a propòsit dels límits que són legítimament imposables a l'esmentat exercici és quelcom present i habitual (incloses, específicament, les normes reguladores del règim jurídic de l'audiovisual).

Per citar només uns quants exemples, podem referir-nos en primer lloc a la Llei orgànica 9/1983, de 15 de juliol, reguladora del dret de reunió. L'article 10 d'aquesta llei atribueix a l'autoritat administrativa competent la capacitat per delimitar i fins i tot impedir, sobre la base d'una sèrie de criteris enunciats de manera genèrica (bàsicament el criteri de l'alteració de l'ordre públic o el perill per a persones o béns) i deixats a la interpretació i aplicació concreta de l'Administració en cada cas, l'exercici del dret fonamental de reunió reconegut a l'article 21 CE. Tenint en compte, d'altra banda, que l'article 23 de la Llei orgànica 1/1992, de 21 de febrer, de protecció de la seguretat ciutadana tipifica com a infracció greu la celebració de reunions en llocs de trànsit públic o de manifestacions incomplint el que es preveu al citat article 10 de la Llei orgànica 9/1983.

En segon lloc, i com és prou conegut, el Reial Decret-Llei 17/1977, de 4 de març, de reforma de la normativa sobre relacions de treball, atorga a l'Administració, a través de l'article 10, la potestat de limitar i especificar l'abast de l'exercici del dret fonamental a la vaga en aquells casos en què sigui necessari establir els coneguts com a *serveis mínims*: “*Cuando la huelga se declare en empresas encargadas de la prestación de cualquier género de servicios públicos o de reconocida e inaplazable necesidad y concurren circunstancias de especial*

*gravedad, la Autoridad gubernativa podrá acordar las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de los servicios". D'altra banda, resulta molt interessant, als efectes de les actuals consideracions, veure com el Tribunal Constitucional va avalar, en el seu moment (Sentència 11/1981, de 8 d'abril), l'atribució a l'Administració pública de la responsabilitat de l'establiment i el control del marc legítim de l'exercici del dret fonamental en qüestió: "La decisión sobre la adopción de las garantías de funcionamiento de los servicios no puede ponerse en manos de ninguna de las partes implicadas, sino que debe ser sometida a un tercero imparcial. De este modo, atribuir a la autoridad gubernativa la potestad para establecer las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de los servicios mínimos no es inconstitucional, en la medida en que ello entra de lleno dentro de las previsiones del artículo 28.2 de la Constitución, y, además, es la manera más lógica de cumplir con el precepto constitucional. **La autoridad gubernativa se encuentra -ello es obvio- limitada en el ejercicio de esta potestad. Son varios los límites con los que se topa. Ante todo, la imposibilidad de que las garantías en cuestión vacíen de contenido el derecho de huelga o rebasen la idea de contenido esencial, y, después, en el orden formal, la posibilidad de entablar contra las decisiones la acción de tutela jurisdiccional de derechos y libertades públicas y el recurso de amparo ante este Tribunal.**" Com podem veure, doncs, en cap moment el Tribunal Constitucional parla de monopolis jurisdiccionals en la delimitació i el control de l'exercici dels drets fonamentals, sinó que els límits només es trobarien en el necessari respecte del contingut essencial del dret afectat, així com en l'existència, en tot cas, de la garantia del recurs jurisdiccional i davant del mateix Alt Tribunal enfront de la corresponent decisió administrativa prèvia.*

Finalment, val la pena recordar que la legislació vigent en matèria audiovisual preveu el control, per part de l'Administració competent, de l'adequat exercici, i dins dels seus límits, dels drets fonamentals a la llibertat d'informació i d'expressió per part dels corresponents prestadors dels serveis, incloent-hi fins i tot la possibilitat d'imposar la corresponent sanció en aquells casos en què pugui apreciar-se algun tipus de vulneració o incompliment en la matèria. En aquest sentit, l'article 3 de la Llei 10/1988, de 3 de maig, de televisió privada, estableix que l'activitat de les societats titulars de la corresponent concessió administrativa per a la gestió indirecta del servei públic de televisió s'haurà d'inspirar en els principis continguts en l'article 4 de la Llei 4/1980, de 10 de gener, de l'estatut de la ràdio i la televisió

(entre els quals es troba, com és prou conegut, el deure d'objectivitat, imparcialitat i veracitat de les informacions, el de separació entre informacions i opinions, així com el deure de respecte de l'honor de les persones), tot establint a continuació el corresponent règim sancionador (article 24 i següents), en el marc del qual es tipifica com a infracció molt greu l'incompliment del que es preveu al citat article 3 de la Llei. No cal dir que, sens perjudici, òbviament, del recurs als Tribunals per tal d'impugnar la decisió administrativa corresponent, tant el control de l'activitat de les societats concessionàries (especialment pel que fa al compliment dels seus deures concessionals, entre ells els esmentats deures establerts a l'article 3 de la Llei 10/1988) com l'exercici de les corresponents potestats sancionadores, el legislador els atribueix a un òrgan de caràcter administratiu (el Ministeri de Transports, Turisme i Comunicacions, el qual en l'actualitat s'ha convertit, com és prou conegut, en el Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç). Així mateix, no podem oblidar tampoc que aquest esquema s'ha repetit i mantingut per part del legislador a partir d'aquell moment. Cal citar en aquest moment, de manera no necessàriament exhaustiva, el que es preveu, en aquest mateix sentit, als articles 2 i 4 de la Llei 11/1991, d'organització i control de les emissores municipals de radiodifusió sonora, a la disposició addicional setena de la Llei 37/1995, de 12 de desembre, de telecomunicacions per satèl·lit, als articles 6, 12 i 16 de la Llei 41/1995, de 22 de desembre, de televisió local per ones terrestres, així com als articles 17 i 19 i següents de la Llei 25/1994, de 12 de juliol, d'incorporació a l'ordenament jurídic espanyol de la Directiva 89/552/CEE sobre la coordinació de disposicions legals, reglamentàries i administratives dels Estats membres relatives a l'exercici d'activitats de radiodifusió televisiva (atenent en especial al règim de control i sanció per part de l'Administració en relació amb el respecte del límit de la protecció de la joventut i la infància, establert en termes de principi, pel que fa a l'exercici de la llibertat d'expressió, a l'article 20.4 CE). Com veurem en un epígraf posterior, i concretament pel que fa al cas de Catalunya i a les concessions per a la prestació del servei de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència, l'article 3 conjuntament amb l'article 11 del Decret 269/1998, de 21 d'octubre, estableixen una sèrie de principis inspiradors de l'activitat de les emissores privades de radiodifusió (els quals són, essencialment, i un cop més, els establerts a l'article 4 de la Llei 4/1980), així com, òbviament, el control del seu compliment per part de l'Administració concedent, en la mesura que aquestes potestats de control i direcció són les pròpies i necessàries, d'acord amb la legislació sobre contractes de les Administracions públiques, en el marc d'una relació jurídica

basada en un contracte de gestió de serveis públics (article 155 del Decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny).

L'aplicació de la normativa audiovisual a Catalunya, la qual suposa, com s'ha vist, en un bon nombre de casos, la determinació i verificació del respecte dels límits constitucionals a l'exercici de la llibertat d'expressió i d'informació, presenta una sèrie d'especialitats en relació amb l'organisme encarregat de dur-la a terme, que han de ser forçosament destacades en aquest moment. Així, mentre en el cas de la normativa de caràcter estatal, i en relació igualment amb prestadors de serveis que disposin d'un títol habilitant dins l'esmentat àmbit territorial, l'òrgan competent es troba integrat dins l'estructura jeràrquica de l'Administració central de l'Estat, i més concretament, es tracta d'un òrgan que forma part del Govern (estem parlant, tal com ja s'ha apuntat abans, del Ministre d'Indústria, Turisme i Comerç), en el cas de Catalunya l'autoritat administrativa competent en la matèria entra dins la categoria de les anomenades autoritats independents.

La previsió per part del legislador de l'esmentat tipus d'autoritats és quelcom habitual en els països d'Europa i fins i tot podríem afirmar que del món occidental. És a dir, en definitiva, en aquells sistemes constitucionals que es basen en un règim polític institucional i de protecció dels drets fonamentals equiparable a l'espanyol.

Tal com és prou conegut, i en el present context és clar que només es pot fer un breu recordatori en aquest sentit, el recurs a òrgans administratius adjectivats com a *independents* (com és el cas, ja s'ha dit, del Consell) suposa, d'una banda, la creació d'organismes que es troben desvinculats de l'estructura jeràrquica del poder executiu i, en definitiva, que no se subjecten en cap mena de directriu política emanada del Govern com a òrgan suprem de direcció de l'aparell administratiu. Aquesta independència es construeix i garanteix, essencialment, a través de la previsió d'un règim jurídic de presa de decisions en virtut de les quals, un cop adoptades, només són susceptibles de control i correcció per part dels òrgans jurisdiccionals. Així mateix, un element encara més important pel que fa a l'esmentada garantia de la independència radica en la composició de l'òrgan en qüestió (de naturalesa col·legiada i integrat per persones de prestigi reconegut i contrastat, amb experiència professional en el sector de què es tracti, que ofereixin garanties plenes d'independència, i

sotmeses a un rígid règim d'incompatibilitats: articles 4.2 i 6 de la Llei 2/2000), el sistema de nomenament dels seus membres (en el cas del Consell, i a excepció del president, que és nomenat pel Govern, l'article 4.1 de la Llei reguladora preveu que els nous membres de l'organisme han de ser nomenats per una majoria parlamentària de dos terços, a partir, així mateix, d'una proposta formulada com a mínim de tres grups parlamentaris), així com la durada de cada mandat, el qual no se subjecta a cap possible decisió política, sinó que ha estat establert de manera rígida per part del legislador (en el cas del Consell, el legislador ha previst concretament un mandat de sis anys sense possibilitat de renovació: article 5.1 de la Llei 2/2000).

D'altra banda, la creació dels anomenats organismes independents en el marc dels sistemes polítics i institucionals del nostre entorn respon a la necessitat de preservar o aïllar la regulació i la presa de decisions que afecten l'activitat de subjectes públics i privats en el marc d'un determinat sector de la vida social i econòmica, respecte de la direcció dels òrgans superiors i de direcció política incardinats dins l'estructura jeràrquica del poder executiu. Es tracta, doncs, de permetre que les directrius reguladores bàsiques de determinats sectors siguin desenvolupades i aplicades per part d'organismes que actuen amb independència dins del respecte de la legalitat, tot aplicant la norma sota criteris d'expertesa tècnica i professional. I això és així en aquells casos en què el sector objecte de regulació presenta una especial vulnerabilitat i requereix ser adequadament aïllat respecte de criteris i decisions de caire estrictament polític, així com de determinades influències que tindrien el seu origen en els interessos del sector regulat. És evident, en aquest sentit, que els àmbits de regulació directament vinculats a l'exercici de drets fonamentals constitueixen un terreny especialment indicat per a l'actuació dels organismes independents de constant referència, tenint en compte, sobretot, que els destinataris de l'acció pública de què es tracti poden ser tant subjectes privats com entitats vinculades o dependents dels poders públics. En qualsevol cas, sembla clar que en un àmbit com és el del control de les activitats dels mitjans de comunicació, públics o privats, de Catalunya –hi hauria, però, altres exemples, com ara la protecció de les dades de caràcter personal–, l'atribució a un organisme com el Consell de la competència per prendre determinades decisions resulta una opció força més preferible que la que és actualment vigent a la resta de l'Estat, on és un òrgan polític integrat al Govern, dependent de les seves directrius, que pren les corresponents decisions.

Així mateix, cal destacar aquí també que l'atribució de les esmentades competències de control i regulació, dins l'àmbit de l'audiovisual, en favor d'autoritats o organismes de caràcter independent (en els termes en què l'esmentada independència acaba de ser caracteritzada) és el mecanisme adoptat, en data d'avui, a tots els països de la Unió Europea amb la sola excepció, en l'àmbit del conjunt de l'Estat, del cas espanyol.

A títol, un cop més, de mer recordatori, cal fer esment del que preveu la Llei francesa 86-1067, de 30 de setembre de 1986 (amb les seves corresponents i posteriors reformes), la qual estableix en el seu article 3.1 que el *Conseil Supérieur de l'Audiovisuel* (CSA) és l'autoritat independent que garanteix l'exercici de la llibertat de la comunicació dins l'àmbit de la ràdio i la televisió, tot atribuint-li, entre altres missions, la de vetllar per la qualitat i la diversitat dels continguts, o el caràcter pluralista i l'honestedat de la informació i la seva independència dels interessos econòmics (articles 29 i 33-1 de la citada Llei), tenint en compte la potestat del Consell per a l'adopció de mesures fins i tot de caràcter sancionador en els casos d'incompliment dels deures imposats legalment o en el marc del corresponent títol habilitant (articles 42 i 48 de la Llei). Sense oblidar, així mateix, que el *Conseil Constitutionnel*, com a màxim garant de la Constitució francesa va avalar, en la seva coneguda Decisió de 17 de gener de 1989, la competència del CSA pel que fa al control de l'exercici de llurs llibertats en l'àmbit de l'expressió per part de la ciutadania i fins i tot a l'exercici de poders de caràcter sancionador¹.

¹ "27. Considérant que, pour la réalisation de ces objectifs de valeur constitutionnelle, il est loisible au législateur de soumettre les différentes catégories de services de communication audiovisuelle à un régime d'autorisation administrative ; qu'il lui est loisible également de charger une autorité administrative indépendante de veiller au respect des principes constitutionnels en matière de communication audiovisuelle ; que la loi peut, de même, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, doter l'autorité indépendante chargée de garantir l'exercice de la liberté de communication audiovisuelle de pouvoirs de sanction dans la limite nécessaire à l'accomplissement de sa mission ; 28. Considérant qu'il appartient au législateur d'assortir l'exercice de ces pouvoirs de mesures destinées à sauvegarder les droits et libertés constitutionnellement garantis 29. Considérant que, conformément au principe du respect des droits de la défense, lequel constitue un principe fondamental reconnu par les lois de la République, aucune sanction ne peut être infligée sans que le titulaire de l'autorisation ait été mis à même tant de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés que d'avoir accès au dossier le concernant ; qu'en outre, pour les sanctions prévues aux 2°, 3° et 4° de l'article 42-1 ainsi que dans le cas du retrait de l'autorisation mentionné à l'article 42-3, le législateur a prescrit le respect d'une procédure contradictoire qui est diligentée par un membre de la juridiction administrative suivant les modalités définies à l'article 42-7 ; qu'il ressort de l'article 42-5 que le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans, s'il n'a été accompli "aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction" ; 30. Considérant que le pouvoir d'infliger les sanctions énumérées à l'article 42-1 est conféré au

En segon lloc, en el cas del Regne Unit, la secció 319 de la Communications Act de 2003 atribueix a l'Ofcom (organisme regulador de caràcter independent) la competència per establir els corresponents estàndards i controlar el seu compliment, concretament, en relació amb el fet que *“news included in television and radio services is presented with due impartiality and that the impartiality requirements of section 320 are complied with”*, així com que *“news included in television and radio services is reported with due accuracy”*, tot preveient la imposició, en el seu cas, de les corresponents sancions (vegeu, en aquest sentit, la secció 395). Cal tenir present d'altra banda, que l'*Ofcom Broadcasting Code*, elaborat per l'autoritat de regulació, va entrar en vigor el 25 de juliol passat i conté tot un seguit d'especificacions que desenvolupen els esmentats principis generals establerts pel legislador.

En tercer lloc, la legislació italiana (recentment sistematitzada en el marc del *Decreto legislativo 31 Luglio 2005, n. 177 – Testo unico della radiotelevisione*), estableix com a principis fonamentals dels sistema radiotelevisiu la *“garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e*

Conseil supérieur de l'audiovisuel qui constitue une instance indépendante ; qu'il résulte des termes de la loi qu'aucune sanction ne revêt un caractère automatique ; que, comme le prescrit l'article 42-6, toute décision prononçant une sanction doit être motivée ; que la diversité des mesures susceptibles d'être prises sur le fondement de l'article 42-1 correspond à la volonté du législateur de proportionner la répression à "la gravité du manquement" reproché au titulaire d'une autorisation ; que le principe de proportionnalité doit pareillement recevoir application pour l'une quelconque des sanctions énumérées à l'article 42-1 ; qu'il en va ainsi en particulier des sanctions pécuniaires prévues au 3° de cet article ; qu'à cet égard, l'article 42-2 précise que le montant de la sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages tirés du manquement par le service autorisé ; qu'un même manquement ne peut donner lieu qu'à une seule sanction administrative, qu'elle soit légale ou contractuelle ; qu'il résulte du libellé de l'article 42-1 (3°) qu'une sanction pécuniaire ne peut se cumuler avec une sanction pénale; 31. **Considérant qu'il convient de relever également que toute décision infligeant une sanction peut faire l'objet devant le Conseil d'Etat d'un recours de pleine juridiction**, comme le précise l'article 42-8 ; que ce recours est suspensif d'exécution en cas de retrait de l'autorisation mentionné à l'article 42-3 ; que, dans les autres cas, le sursis à l'exécution de la décision attaquée peut être demandé en application de l'article 48 de l'ordonnance n° 45-1078 du 31 juillet 1945 et du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ; que le droit de recours étant réservé à la personne sanctionnée, son exercice ne peut, conformément aux principes généraux du droit, conduire à aggraver sa situation ; 32. **Considérant que, s'agissant de manquements à des obligations attachées à une autorisation administrative et eu égard aux garanties prévues, qui sont d'ailleurs également applicables aux pénalités contractuelles et à la sanction susceptible d'être infligée en vertu de l'article 42-4, les articles 42-1 et 42-2 ajoutés à la loi du 30 septembre 1986 par l'article 19 de la loi déferée, ne sont pas contraires, dans leur principe, aux articles 11 et 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen”.**

religiose e la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, a livello nazionale e locale, nel rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario, dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali". Així mateix, i d'acord amb l'article 10 de la mateixa norma, correspon també a una autoritat independent, en aquest cas l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la garantia del correcte exercici i dins dels seus límits, dels drets fonamentals de la persona dins l'àmbit de les comunicacions, la qual cosa fins i tot inclou, en el marc del règim jurídic italià de la ràdio i la televisió, l'exercici de potestats de caràcter sancionador.

Cal fer esment, igualment, del cas alemany. És igualment clar, en la línia del que hem assenyat, el que s'estableix en el marc del *Rundfunkstaatsvertrag* o Acord Interestatal en matèria de ràdio i televisió, de data 31 d'agost de 1991, en el sentit d'establir tot un seguit de deures a càrrec del mitjans de comunicació, els quals delimiten el marc del legítim exercici de les seves llibertats d'informació i expressió, tot atribuint als corresponents organismes reguladors independents (en aquest cas, d'ordre essencialment estatal i no federal) amplis poders de fiscalització, inclosa la imposició de sancions (vegeu en aquest sentit els articles 35 i 49 del citat Acord).

Finalment, cal recordar, dins d'aquest ordre de consideracions, la Recomanació 23(2000) del Consell de Ministres del Consell d'Europa, relativa precisament a la independència i funcions de les autoritats reguladores de l'audiovisual. En el marc de la mateixa, el Consell considera que les autoritats administratives de regulació de l'audiovisual juguen un important paper, dins del marc de la llei, en la garantia de l'existència d'una àmplia varietat de mitjans independents i autònoms en el sector de la radiodifusió, a fi i a efecte de proporcionar una regulació proporcional i adequada del sector, per tal d'assegurar un equilibri entre la llibertat dels mitjans i altres drets i interessos legítims. Així mateix, i com a conseqüència de l'anterior, es recomana expressament als Estats membres l'establiment de les corresponents autoritats reguladores independents, tot tenint en compte que un instrument essencial –si bé

que no l'únic- per a l'exercici de les seves funcions ha de poder ser la potestat per a la imposició de les corresponents sancions, inclosa la consistent en la retirada de la llicència.

Queda clar, doncs, que l'actuació del Consell en el marc del present acord es produeix de conformitat amb les competències que la legislació li atribueix clarament a aquest efecte, i que esdevé l'organisme més adient per exercir-les sense que, en conseqüència, tingui cap mena de fonament el vici d'incompetència que al·leguen els interessats.

2.- Sobre el suposat caràcter d'acte de censura que s'atribueix a la proposta d'acord notificada.

Els al·legants assenyalen que les actuacions del Consell en el si del present procediment constitueixen un acte de censura proscriu per la Constitució en el seus articles 20.2 i 20.5.

De la jurisprudència mateixa del Tribunal Constitucional que citen els interessats es desprèn clarament que la censura és un acte de control o fiscalització necessàriament *previ* a la difusió d'informacions i d'expressions, amb la finalitat de decidir sobre l'autorització o acceptació de l'esmentada difusió.

La proposta d'acord notificada als interessats és prou clara en el sentit que es refereix, en tot cas, a l'exercici de les potestats del Consell en relació amb continguts que ja han estat objecte de difusió o comunicació pública. És prou evident que en cap cas el Consell pretén controlar de manera preventiva els continguts que difonen els al·legants o qualsevol altre mitjà de comunicació, de la mateixa manera que és encara més evident que aquest Consell tampoc no s'ha plantejat mai segrestar gravacions o continguts. L'única actuació duta a terme, en exercici de les competències legalment atorgades, consisteix en l'anàlisi de continguts ja difosos per tal de verificar si durant l'emissió s'ha produït algun tipus de vulneració de les normes que regeixen la comunicació audiovisual, i en particular, les condicions a les quals es troben subjectes, com a concessionaris, els al·legants.

Finalment, pel que fa al retret relatiu a la suposada desviació política de l'actuació del Consell, concretament al pretès seguiment de directrius formulades per dirigents de

determinats partits polítics, simplement val la pena de recordar les consideracions dutes a terme en l'apartat anterior en relació amb la independència d'aquesta institució, així com, de manera particular, el fet que l'inqüestionable dret a la defensa de què són titulars els interessats no els autoritza per a la formulació, amb una patent manca de fonament o prova, de greus acusacions. El discutible qüestionament de la competència del Consell en cap cas pot legitimar una pèrdua del respecte degut a qualsevol organisme públic en l'exercici de les seves funcions.

3.- Sobre la suposada necessitat d'incorporar al procediment les actuacions del Consell dutes a terme envers empreses diferents a les vinculades a la cadena COPE.

La resposta a l'esmentada al·legació passa simplement per recordar que la proposta d'acord notificada només té per objecte els continguts difosos per les emissores que s'hi esmenten. Aquest és el motiu pel qual s'ha donat només als interessats la possibilitat de formular al·legacions i no a qualsevol altra entitat o mitjà.

El Consell, com qualsevol altra Administració pública, tramita separatament procediments administratius que no tenen relació entre si. No s'entén quin sentit tindria incorporar al present procediment actuacions que haurien de ser objecte de tramitació separada per tal de poder aplicar correctament i respectar les oportunes garanties de defensa i fins i tot de confidencialitat.

En qualsevol cas, si els interessats entenen que s'han produït, per part d'altres mitjans, determinades vulneracions o incompliments del seu règim de deures i obligacions, tenen dret a formular la corresponent denúncia davant del Consell. Denúncia que, com no podia ser d'una altra manera, i tal com va succeir tot just en el marc del procediment actualment en curs, serà degudament analitzada a fi i a efecte d'establir i dur a terme aquelles actuacions que siguin procedents.

4.- Sobre el fet que el present procediment perseguiria, presumptament, la *preconstitució d'una causa* per no renovar les concessions de què són titulars els interessats.

La resposta a aquesta darrera al·legació passa, un cop més, per recordar quin és l'objecte del procediment administratiu en el marc del qual es dicta el present Acord. Es tracta, segons les atribucions que legalment té conferides el Consell, de verificar el grau de compliment, per part de les emissores destinatàries, dels deures que en matèria de continguts els imposa la normativa vigent, així com aquells que es deriven de l'específic règim concessional al qual es troben sotmeses. En cap cas, doncs, aquest Acord té per objecte la presa de decisions relatives a la renovació de les concessions de què són titulars els interessats.

D'altra banda, i en qualsevol cas, cal posar de manifest que l'actual redacció de l'article 10.2 Decret 269/1998, de 21 d'octubre, és prou clara a l'hora d'establir, concretament als apartats a), b) i c), les causes d'ordre subjectiu que, en el seu cas, legitimarien la denegació de la corresponent sol·licitud de renovació de la concessió. Es tracta, en tots els supòsits, de la prèvia imposició al corresponent titular d'un determinat nombre de sancions. Com és prou evident, en la mesura en què no es pot atorgar al present procediment administratiu naturalesa sancionadora, la finalitat o conseqüència del mateix mai podrà ser l'esmentada denegació d'una futura sol·licitud de renovació del títol habilitant.

Cal recordar, d'altra banda, que recentment el Tribunal Suprem s'ha pronunciat (la Sentència data del 15 de novembre passat si bé la seva notificació no té lloc fins al dia 29) sobre les pretensions en el seu dia formulades, precisament, per part dels interessats, en relació amb els mecanismes i criteris aplicables a l'hora de renovar les concessions de què són titulars, tot recordant, així mateix, que les causes de no renovació de caràcter subjectiu són precisament les esmentades al paràgraf anterior. De manera que, a la vista del que s'ha dit al paràgraf anterior, i de l'esmentada resolució judicial, l'al·legació presentada en aquest sentit perd la seva raó de ser.

SEGON.- RÈGIM JURÍDIC APLICABLE ALS CONTINGUTS TRANSCRITS EN ELS ANTECEDENTS DEL PRESENT ACORD.

Tal com s'ha posat de manifest al llarg dels antecedents del present Acord, els continguts que seran objecte d'anàlisi han estat difosos, en primer lloc, per una sèrie d'entitats prestadores

del servei públic de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència, en règim de gestió indirecta, com a conseqüència de l'atorgament de la corresponent concessió administrativa. L'atorgament de les esmentades concessions ha estat dut a terme, concretament, pel Consell Executiu de la Generalitat, d'acord amb el que preveu l'article 26.5 de la Llei 3/1987, de 18 de desembre, d'Ordenació de les Telecomunicacions (en endavant, LOT)².

D'altra banda, els esmentats continguts han estat igualment difosos pels titulars d'un seguit de concessions administratives per a la gestió indirecta del servei públic de radiodifusió sonora d'ona mitjana, atorgades en aquest cas per l'òrgan competent de l'Administració de l'Estat, a l'empara igualment del que preveu el citat article 26 (apartat 2.b) LOT.

Cal establir, d'entrada, i als efectes de les finalitats del present Acord, quin és el règim jurídic aplicable als continguts emesos pels concessionaris esmentats en primer lloc.

La primera norma a la qual cal fer esment és el Decret 269/1998, de 21 d'octubre, en virtut del qual s'aprova el reglament que regula el règim jurídic de les concessions per a la prestació del servei de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència per part d'emissores comercials. Concretament, el seu article 3 estableix els següents principis inspiradors de l'activitat dels esmentats concessionaris:

“Amb caràcter general, els principis inspiradors de l'activitat de les emissores de radiodifusió són els següents:

- a) L'objectivitat, la veracitat i la imparcialitat de les informacions.*
- b) El respecte al pluralisme polític, religiós, social, cultural, ideològic i lingüístic.*
- c) El respecte a l'honor, a la intimitat de les persones, a la pròpia imatge i altres drets i llibertats reconeguts a la Constitució espanyola.*
- d) El respecte als valors d'igualtat recollits a l'article 14 de la Constitució espanyola.*
- e) La protecció de la cultura i de la normalització de la llengua catalana i de l'aranès.*

² Com és prou conegut, aquest precepte, juntament amb alguns altres de l'esmentada LOT, manté la seva vigència en el moment present malgrat la ulterior i consecutiva entrada en vigor (els anys 1998 i 2003) de dues lleis generals en matèria de telecomunicacions.

- f) La defensa i la promoció del medi ambient.*
- g) La protecció de la joventut i la infància.*
- h) La promoció de la dona.*
- i) La separació entre informacions i opinions, i la identificació de les persones que formulen aquestes últimes i la seva lliure expressió d'acord amb el que estableix l'article 20.4 de la Constitució espanyola (RCL 1978,2836; ApNDL 2875).*
- j) La separació perceptible de la programació de la publicitat, de manera que en resulti inequívoc el caràcter publicitari dels missatges.”*

D'altra banda, cal recordar que aquest precepte recull, de fet, els principis establerts ja en el marc de l'article 3 de la Llei 8/1996, de 5 de juliol, reguladora de la programació audiovisual distribuïda per cable, la qual declara, en la seva disposició addicional, l'aplicabilitat d'aquests als concessionaris de la gestió indirecta del servei de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència.

A tot l'anterior caldria afegir, lògicament, aquelles específiques obligacions que s'entenguessin igualment aplicables als concessionaris en virtut de les previsions contingudes en els corresponents plecs de clàusules administratives particulars.

En qualsevol cas, el text del Decret abans citat és molt clar a l'hora d'establir un conjunt de deures especialment rellevants als efectes del contingut i finalitats d'aquest Acord, en concret els relatius a l'objectivitat, veracitat i imparcialitat de les informacions, el respecte al pluralisme polític, religiós, social, cultural, ideològic i lingüístic; el respecte a l'honor, a la intimitat de les persones, a la pròpia imatge i altres drets i llibertats reconeguts a la Constitució espanyola; així com, finalment, la separació entre informacions i opinions, i la identificació de les persones que formulen aquestes últimes i la seva lliure expressió d'acord amb el que estableix l'article 20.4 de la Constitució espanyola.

Com resulta prou evident, bona part de les citades obligacions no deuen només la seva vigència al fet d'haver estat previstes en el marc del Decret de referència, sinó que recullen de forma fidel els termes en què l'article 20 de la Constitució espanyola reconeix els drets

fonamentals a la llibertat d'informació i a la llibertat d'expressió i estableix, igualment, els seus límits.

En definitiva, que l'anàlisi del compliment d'aquelles obligacions que, com veurem, resulten més determinants en el context del present Acord consistirà, de manera predominant, en una investigació a propòsit de fins a quin punt els esmentats drets han estat degudament exercits.

En tot cas, però, ha de quedar clar que la constatació d'un incompliment de les esmentades obligacions en el marc del procediment administratiu que dóna lloc al present Acord pot donar lloc a unes determinades conseqüències jurídiques d'acord amb l'ordenament vigent. En aquest sentit, és necessari recordar que d'acord amb l'article 11.j) del Decret 269/1998, de 21 d'octubre, interpretat de forma sistemàtica amb l'article 6.h) de l'esmentada norma, l'incompliment dels principis en matèria de continguts formulats a l'article 3 del Decret constitueix a la seva vegada un incompliment de les obligacions del servei. Incompliment el qual, si és constatat de forma reiterada i en el marc dels corresponents expedients administratius instruïts a l'efecte, constitueix una causa jurídicament prevista d'extinció de la concessió.

D'altra banda, pel que fa als prestadors del servei de radiodifusió en ona mitjana, cal posar de manifest que la deficient tècnica legislativa que s'arrossega, dins del marc de la legislació estatal, quant a la regulació de les condicions de la prestació del servei esmentat, fa que no resulti fàcil trobar una norma jurídica, diferent de la pròpia norma constitucional, on poder identificar un règim jurídic específic, especialment en relació amb els límits i les obligacions en matèria de continguts³. Sens perjudici d'allò que puguin establir els corresponents plecs de clàusules en el marc dels respectius contractes concessionals, el que en tot cas resulta evident és el fet que aquests concessionaris, com a exercents dels drets fonamentals a la llibertat d'informació i d'expressió, es troben sotmesos al marc, límits i requisits que, en relació amb el seu exercici, estableix l'esmentat article 20 de la Constitució.

³ No és l'objectiu del present Acord tractar a fons aquesta problemàtica. Cal recordar, en qualsevol cas, que l'aplicació dels articles encara vigents de la LOT, juntament amb el règim d'obligacions que hom pot entendre que es deriva de la Llei 32/2003, de 3 de novembre, General de telecomunicacions, obliguen a arribar a la

TERCER.- ÀMBIT DE COMPETÈNCIES DEL CONSELL AUDIOVISUAL DE CATALUNYA EN RELACIÓ AMB ELS CONTINGUTS OBJECTE D'AQUEST ACORD.

D'acord amb l'article 1.2 de la Llei 2/2000, de 4 de maig, del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, correspon una funció central d'aquesta institució la de vetllar *“pel respecte dels drets i les llibertats que, en l'àmbit dels mitjans de comunicació audiovisual de radiodifusió sonora, televisió i qualsevol altre sistema de transmissió de so o imatge, són reconeguts per en la Constitució i en l'Estatut d'Autonomia, i, especialment, garanteix el compliment de la normativa reguladora de la programació i la publicitat, i de les condicions de les concessions, i també el compliment de l'eficàcia i l'observança de la normativa europea i dels tractats internacionals relatius a aquesta matèria”*.

Igualment, l'article 10.d) de la mateixa Llei, dins del marc del llistat exhaustiu de les competències del Consell s'inclou la següent:

“Vetllar pel compliment del que estableix la normativa reguladora del sector de l'audiovisual i per la indemnitat dels principis que la informen, i, en particular, assegurar l'observança dels principis de pluralisme polític, social, religiós, cultural i de pensament.”

Queda clar doncs, que la Llei atribueix al Consell, d'entrada, una competència general consistent a vetllar perquè tots els continguts que són difosos pels mitjans de comunicació que es troben dins l'àmbit de la competència de la Generalitat de Catalunya respectin no ja només allò previst a la Constitució pel que fa al reconeixement dels drets fonamentals a la llibertat d'informació i la llibertat d'expressió, sinó també la diferent normativa sectorial que els afecta i, fins i tot aquells deures i obligacions que puguin derivar-se de l'existència d'una determinada relació jurídica de caire concessional.

conclusió formulada al text principal pel que fa al règim aplicable als continguts difosos pels concessionaris de referència.

⁵ “La actividad de los medios de comunicación social del Estado se inspirará en los siguientes principios:

En conseqüència, independentment del fet que en determinats casos l'establiment de les conseqüències jurídiques que es derivin de l'incompliment dels esmentats deures pugui correspondre a un òrgan o organisme que no sigui el Consell de l'Audiovisual de Catalunya – de manera destacada, i com és evident, aquell ens o òrgan que en el seu moment va atorgar el corresponent títol concessional–, el cert és que la Llei és clara a l'hora de confiar a aquesta institució la responsabilitat de verificar, en tot moment, que els continguts audiovisuals que es posen a disposició de la ciutadania no incorrin en cap mena d'incompliment de l'ampli i complex règim jurídic –tant en l'àmbit del text constitucional com en el de la normativa de caràcter inferior– que els resulta aplicable.

No cal oblidar, d'altra banda –i caldrà reprendre aquest reflexió en un apartat posterior–, que les responsabilitats que la Llei atribueix al Consell no només es mouen dins l'àmbit de la protecció de l'exercici dels seus drets fonamentals per part dels corresponents operadors, la determinació dels seus límits d'acord amb la Constitució i la normativa aplicable, així com la protecció dels drets dels ciutadans que puguin veure's afectats per la manca de respecte dels esmentats límits, sinó que també en l'exercici de totes aquestes responsabilitats el Consell de l'Audiovisual de Catalunya duu a terme una contribució decisiva al correcte i més intens desenvolupament del nostre sistema democràtic, en la mesura que contribueix de manera decisiva a l'existència d'un espai públic de comunicació al més independent, ampli i divers possible, a partir del qual es facilita la formació d'una opinió pública autènticament lliure.

QUART.- LA DELIMITACIÓ ENTRE LA DIFUSIÓ D'INFORMACIÓ I L'EXPRESSIÓ D'IDEES, PENSAMENTS I OPINIONS.

L'article 20 de la Constitució proclama com a drets fonamentals la llibertat d'expressió i la llibertat d'informació (entesa tant des del punt de vista de l'emissor com del receptor), concretament, i de forma respectiva, als articles 20.1.a) i 20.1.d).

Sens perjudici que en un fonament posterior haguem d'endinsar-nos en l'abast, significació i límits pel que fa al reconeixement i protecció constitucional dels esmentats drets, cal fer ara algun aclariment en relació amb l'àmbit material al qual fan referència: és a dir, d'una banda, la difusió d'informació, i de l'altra, l'expressió d'idees, pensaments o opinions.

És evident, d'entrada, que la Constitució parteix de l'existència de clares diferències entre ambdós àmbits de comunicació. I és cert, d'altra banda, tal com veurem, que aquestes diferències s'acaben traduint en la previsió d'un tractament diferenciat, tant des del punt de vista de l'abast de la protecció constitucional, com dels seus límits. És per això que en un bon nombre d'ocasions el Tribunal Constitucional, com a màxim intèrpret de la norma fonamental, ha intentat formular alguns criteris útils de cara a identificar i definir què és informació, d'una banda, i què comprèn l'expressió d'idees, pensaments i opinions, de l'altra.

Aquesta formulació, val la pena d'advertir-ho, no ha deixat mai de tenir present la dificultat que planteja, en relació amb alguns formats de la comunicació, la distinció entre informació i expressió (o, si es vol, opinió). Així, si bé resulta clar que *“la Constitución consagra el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión, estableciendo un derecho fundamental diverso del que consiste en expresar y difundir pensamientos, ideas y opiniones, en aras del interés colectivo en el conocimiento de hechos que puedan encerrar trascendencia pública y que sean necesarios para que sea real la participación de los ciudadanos en la vida colectiva”* (STC 105/1983), també la jurisprudència ha acceptat de manera reiterada que *“en los casos reales que la vida ofrece, **no siempre es fácil** separar la expresión de pensamientos, ideas y opiniones de la estricta comunicación informativa, pues **la expresión de pensamientos necesita a menudo apoyarse en la narración de hechos**, y a la inversa, **la comunicación de hechos o noticias no se da nunca en un estado químicamente puro y comprende, casi siempre, algún elemento valorativo** o, dicho de otro modo, una vocación a la formación de una opinión. Ello aconseja, en los supuestos en que pueden aparecer entremezclados elementos de una y otra significación, **atender**, para calificar tales supuestos y encajarlos en cada uno de los apartados del artículo 20, **al elemento que en ellos aparece como preponderante**”* (STC 8/1988).

Dit això, cal assenyalar que pot detectar-se, en el marc de l'ordenament jurídic infraconstitucional, una voluntat que, pel que fa a l'àmbit des mitjans audiovisuals, i atès el fort impacte que tenen en el procés de formació de l'opinió pública, la distinció entre informació i opinió resulti especialment clara per a l'espectador/oient. En aquest sentit, hem

de recordar com l'article 4.b) de la Llei 4/1980, de 12 de gener, per la qual s'aprova l'Estatut de la ràdio i la televisió (LERTV, en endavant) introdueix de manera expressa aquest principi en el nostre ordenament, tot exigint l'esmentada separació així com la identificació d'aquells que expressin opinions⁵. D'altra banda, i com és sabut, aquest principi, juntament amb la resta dels que conté el citat article 4 LERTV, ha estat reiterat per les posteriors normes reguladores dels diversos formats de la comunicació audiovisual. De manera destacada, i als efectes del que ens interessa en aquest moment, el Decret 269/1998, de repetida referència, incorpora de forma literal l'esmentada previsió en el seu article 3.i).

Sembla, doncs, que més enllà del que preveu la Constitució i de les formulacions genèriques del Tribunal Constitucional en el sentit que informació i opinió són activitats cridades a solapar-se parcialment en algunes ocasions, en el marc de la prestació de serveis de ràdio o televisió existeix un especial requeriment en el sentit que el subjecte responsable de la difusió d'informacions i opinions hauria de tenir cura de presentar ambdues modalitats de comunicació mínimament separades.

En aquest sentit, s'han pogut detectar alguns supòsits en què l'opinió del conductor del programa corresponent es presenta immediatament després de la narració d'una mera notícia per part d'un altre locutor, tot incorporant, dins d'aquest apunt o comentari de caràcter eminentment editorial, elements que semblen continuar amb la narració de fets de la qual arrenca l'esmentat comentari.

Així, i de manera destacada, en el tall de veu número 2 i immediatament abans de la presentació d'una notícia on es ressenyava la reacció del secretari general d'Esquerra Republicana de Catalunya, senyor Carod-Rovira, en relació amb les al·lusions que es van fer a la seva persona durant una manifestació que tingué lloc a Salamanca en contra de determinades decisions del Govern de l'Estat relatives a l'arxiu històric de la Guerra Civil, el conductor del programa *La mañana*, el senyor Jiménez Losantos afirma, en relació amb l'actuació del Govern de Catalunya i a les conseqüències que pateix qui el critica, o critica els partits polítics que li donen suport, que a Catalunya hom actua “*a tiro limpio con quien les lleva la contraria*”.

Sens perjudici que locutor/narrador de les notícies i conductor/responsable editorial que opina sobre aquestes notícies siguin persones diferents, en la narració de les notícies més importants del dia s'alterna l'expressió d'idees i opinions amb asseveracions que es presenten a l'oient com una narració complementària de notícies o de fets d'actualitat. Si bé és cert que la frase textualment citada sigui fruit o conseqüència de la particular opinió que el senyor Jiménez Losantos té sobre aquelles, és prou clar que aquesta frase no deixa de presentar una clara vocació de narrar quelcom que es vol que sigui percebut per part de l'oient com un fet contrastat: el fet que a Catalunya el debat polític entre el Govern i els seus crítics s'articuli “a tiro limpio” (*sic*) o, com veurem a continuació, sobre la base d'amenaques de mort.

En altres casos, i això serà objecte de major anàlisi posterior, tampoc no és infreqüent que en un context en què, certament, l'opinió podria semblar l'element preponderant del moment concret del programa, algun dels convidats formuli afirmacions o asseveracions que presenten una indubtable voluntat de presentar a l'audiència una narració o descripció de la realitat. Així, en el tall de veu número 1 es pot veure com el senyor Jiménez Losantos intervé després d'una trucada telefònica en què se li demana que expliqui la veritat sobre determinats fets, concretament en relació amb la manifestació organitzada a Salamanca abans esmentada. L'oient reclama que es parli del comportament exemplar dels organitzadors de la concentració. Prèviament, una altra trucada feia referència al dret que tenen les persones d'ideologia conservadora a sortir al carrer i a manifestar-se, tot afirmant que això no agrada a la població d'esquerrers. Aquesta és la resposta del conductor del programa a tot plegat:

*“Hombre, y recordar una cuestión en la que he insistido y insistiré todos los días: **que en Cataluña se está amenazando de muerte a quien critica la política de la Generalitat**, y a Maragall eso no le preocupa lo más mínimo. Y por un papelito de un imbécil en una manifestación de cien mil personas en Salamanca, pues esto sí le preocupa...”*

El Consell és conscient que la separació entre informació i opinió en la prestació de serveis de ràdio i televisió no és un deure de fàcil compliment. En aquest sentit, és innegable que la major part d'emissores actualment en funcionament utilitzen formats en què l'esmentada separació no existeix amb completa nitidesa. I és innegable, així mateix, que aquest recurs contribueix no poques vegades a fer més àgils i atractius determinats continguts, la qual cosa és apreciada sovint per l'audiència mateixa.

En tot cas, és el parer del Consell entendre que l'exigència de l'esmentada separació resulta procedent i té sentit en aquells casos en què com a conseqüència de la manca d'aquesta es perjudica l'espectador o l'oient, tot impedit de manera deliberada que el receptor pugui discernir adequadament entre la mera narració o la presentació de fets d'interès per al públic, i l'expressió d'idees, opinions o pensaments que no es corresponen o que no tenen la vocació de descriure la realitat. No cal oblidar, amb tot, que la consideració d'una determinada activitat de comunicació des d'una perspectiva o l'altra determina l'aplicació de règims, i sobretot de límits, constitucionals diferents.

En aquest sentit, la presentació en un context aparent de mera opinió de quelcom que en puritat no pot ser si no considerat com la narració de fets amb vocació de descripció de la realitat, no podrà impedir-ne mai l'aplicació de límits i requeriments constitucionals exigibles a la difusió d'informació. Així mateix, la voluntat aparent de descripció de la realitat en cap cas podrà servir per entendre que determinats límits a l'exercici de la llibertat d'expressió (essencialment, com veurem, vinculats al respecte de l'honor de les persones i institucions) no siguin igualment aplicables i exigibles.

En particular, el Consell entén que no es pot excloure el límit de la veracitat informativa en aquells supòsits en què les condicions i la forma amb què es presenten els continguts generen una aparença d'informació. És especialment en aquest cas que la distinció entre informació i expressió són necessàries per a la correcta aplicació del règim constitucional aplicable, respectivament, a la llibertat d'informació i a la llibertat d'expressió.

En conseqüència, sens perjudici que pugui afirmar-se que la forma de presentació de determinades informacions i opinions en el marc dels continguts analitzats no sigui del tot correcta des del punt de vista dels requeriments i finalitats acabats d'esmentar, cal entrar en aquest moment en allò que constitueix el nucli central del present acord, és a dir, l'anàlisi d'aquells continguts susceptibles de ser considerats com a informació, a la vista dels límits que la Constitució estableix en relació amb la seva lliure difusió; així com d'aquells altres incardinables dins del concepte més ampli de lliure expressió, tot verificant si en ocasió de la seva comunicació s'han complert els requisits establerts a la nostra norma fonamental.

CINQUÈ.- L'ABAST DEL REONEIXEMENT DE LA LLIBERTAT D'INFORMACIÓ PER LA CONSTITUCIÓ. TRANSGRESSIÓ DELS SEUS LÍMITS PER PART D'ALGUNS DELS CONTINGUTS DIFOSOS ALS PROGRAMES LA MAÑANA I LA LINTERNA DIFOSOS PER LES SOCIETATS CONCESSIONÀRIES A QUI ES DIRIGEIX AQUEST ACORD.

Tal com s'ha dit de manera reiterada, la llibertat d'informació es troba consagrada com a dret fonamental en el marc de l'article 20.1.d) de la Constitució. De forma específica, aquest precepte reconeix el dret a comunicar i rebre informació a través de qualsevol mitjà de difusió. D'altra banda, aquesta informació, d'acord amb la norma fonamental, ha de respondre a un concret requisit o imperatiu: ha de ser, se'ns diu, *veraç*.

Cal destacar, d'entrada, que la llibertat d'informació no té només una vessant *activa*, sinó també *passiva*: la Constitució consagra el dret a difondre lliurement informació, el qual es troba íntimament connectat amb el dret correlatiu dels ciutadans en general a rebre, o més pròpiament, a tenir accés a fonts d'informació que compleixin amb una sèrie de requisits (entre ells, de manera destacada, l'esmentat requisit de la veracitat):

*“El apartado d) del núm. 1 del artículo 20 de la Constitución consagra el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión (...). Se trata, como el art. 20 dice, de **un derecho doble** que se concreta en comunicar la información y recibirla de manera libre en la medida en que la información sea veraz. El objeto de este derecho es por consiguiente el conjunto de hechos que puedan considerarse como noticiables o noticiosos en los términos puntualizados anteriormente y **de él es sujeto primero la colectividad y cada uno de sus miembros**, cuyo interés es el soporte final de este derecho, **del que es asimismo sujeto, órgano o instrumento el profesional del periodismo**, puesto que a él concierne la búsqueda de la información y su posterior transmisión.”* (STC 105/1983)

Així mateix, a banda d'aquesta dimensió estrictament subjectiva, la Constitució atorga un abast de caràcter més objectiu (formulat, concretament, per part del Tribunal Constitucional, a partir de la noció germànica de l'anomenada *garantia institucional*) a l'exercici de les esmentades llibertats: així, la importància del seu reconeixement constitucional no rauria només en el fet que garanteix als individus una determinada esfera d'autonomia o de llibertat,

sinó en el fet que a través del seu exercici es promou la formació de l'anomenada opinió pública lliure, la qual cosa, és alhora condició necessària i imprescindible per a l'adequat funcionament del nostre sistema democràtic:

*“(...) el artículo 20 de la Norma Fundamental, además de consagrar el derecho a la libertad de expresión y a comunicar o recibir libremente información veraz, garantiza un interés constitucional: **la formación y existencia de una opinión pública libre**, garantía que reviste una especial transcendencia, ya que, al ser **una condición previa y necesaria para el ejercicio de otros derechos inherentes al funcionamiento de un sistema democrático**, se convierte, a su vez, en uno de los pilares de una sociedad libre y democrática. Para que el ciudadano pueda formar libremente sus opiniones y participar de modo responsable en los asuntos públicos, ha de ser también informado ampliamente de modo que pueda ponderar opiniones diversas e incluso contrapuestas. En este sentido se ha manifestado este Tribunal desde su STC 6/1981, de 16 de marzo, hasta la más reciente 104/1986, de 17 de julio, al poner reiteradamente de manifiesto que el derecho a la información no sólo protege un interés individual, sino que entraña el reconocimiento y la garantía de una institución política fundamental, que es la opinión pública, indisolublemente ligada con el pluralismo político” (STC 159/1986).*

Com resulta evident, aquesta transcendència i abast de la llibertat d'informació en el marc del nostre sistema constitucional obliga a precisar de manera clara els requisits que cal entendre exigibles a la informació per tal que la seva difusió pugui trobar plena cobertura constitucional.

En primer lloc, i entenent, d'acord amb el Tribunal Constitucional, a la informació com a narració de fets, cal dir que aquests fets han d'estar dotats d'una certa *transcendència pública*. Així, l'Alt Tribunal ha exigít, reiteradament, que en tot cas es tracti d'una informació amb rellevància pública “*ya sea por el carácter público de la persona a la que se refiere o por el hecho en sí en el que esa persona se haya visto involucrada*” (STC 107/1988). De manera que la llibertat d'informació es connecta directament amb el coneixement “*de los asuntos que cobran importancia en la vida colectiva y que, por lo mismo, condiciona la participación de todos en el buen funcionamiento del sistema de relaciones democráticas auspiciado por la Constitución, así como el ejercicio efectivo de otros derechos y libertades*” (STC 168/1986).

És innegable, en aquest context, que si bé qualsevol ciutadà pot legítimament comunicar informacions a tercers, aquesta tasca és duta a terme de manera preeminent per part de

professionals de la informació a través dels corresponents mitjans, de manera que aquests són els destinataris més freqüents de la protecció de la norma fonamental. Així, la llibertat d'informació *“es un derecho del que también gozan, sin duda, todos los ciudadanos, aunque en la práctica sirva, sobre todo, de salvaguardia a quienes hacen de la búsqueda y difusión de la información su profesión específica”* (STC 6/1981).

És clar, doncs, que periodistes i mitjans juguen un paper fonamental dins aquest marc general i que, en conseqüència, hi ha una clara línia de continuïtat entre el lliure exercici de llurs activitats i el sosteniment i desenvolupament de les nostres institucions i el sistema democràtic. Tal com veurem amb més profunditat a continuació, això no *reforçaria* només la intensitat del dret a la llibertat d'informació del qual serien titulars els professionals corresponents, sinó que també els situa en una posició de particular *responsabilitat social*: no qualsevol informació troba l'aixopluc del nostre text constitucional, sinó que els periodistes es troben condicionats, en la seva tasca, pel necessari compliment d'una determinada funció que només pot tenir com a finalitat última i legítima la lliure formació de l'opinió dels ciutadans i l'adequat funcionament del sistema democràtic.

En aquest context cobra una especial rellevància un requeriment constitucional concret, al qual ja s'ha fet alguna referència al llarg del present apartat: el requisit de la veracitat de la informació.

De forma sintètica, podem dir que la veracitat informativa no suposa tant l'exigència als mitjans de mostrar, en cada cas, la veritat completa i absoluta en relació amb uns determinats fets, sinó el fet d'haver desenvolupat una determinada diligència en la seva recerca:

*“Es doctrina reiterada de este Tribunal que **el requisito de la veracidad no va dirigido tanto a la exigencia de una rigurosa y total exactitud en el contenido de la información, cuanto a negar la protección constitucional a los que, defraudando el derecho de todos a recibir información veraz, actúan con menosprecio de la veracidad o la falsedad de lo comunicado, comportándose de manera negligente e irresponsable por transmitir como hechos verdaderos bien simples rumores, carentes de toda constatación, bien meras invenciones o insinuaciones. La información rectamente obtenida y difundida ha de ser protegida, aunque resulte inexacta, con tal que se haya observado el deber de comprobar su veracidad***

mediante las oportunas averiguaciones propias de un profesional diligente” (STC 178/1993, la qual recull ja una doctrina consolidada en la matèria).

És clara doncs la manera com el nostre Tribunal Constitucional descriu la veracitat, entesa com a un requeriment de diligència en la contrastació dels fets que es presenten: *“Sólo la información referida a hechos de relevancia pública y, al tiempo, obtenida y contrastada con un mínimo de diligencia, esto es, veraz, puede encontrar protección en el artículo 20.1.d) CE”* (STC 22/1995). Aquesta diligència, tal com s’ha vist, es troba directament relacionada amb l’adequat respecte de les normes i els procediments propis de la professió periodística.

En aquest mateix sentit s’ha pronunciat la jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH, en endavant), la qual, com és sabut, té un efecte interpretatiu en relació amb els drets fonamentals recollits en el nostre text constitucional.

No és aquest el lloc per explicar l’abast de la jurisprudència del TEDH i els seus clars efectes en la interpretació de l’abast dels drets fonamentals continguts a la nostra Constitució. Com és àmpliament conegut, el Tribunal constitueix una peça institucional fonamental del sistema europeu de protecció dels drets fonamentals, basat d’altra banda en allò que es conté al llarg de l’articulat del Conveni Europeu per a la Protecció dels Drets Humans de 4 de novembre de 1950 (en endavant, CEDH). D’especial interès resulten, en aquest context, les Sentències del Tribunal en aquells casos en què aplica i explicita l’abast del que preveu l’article 10 CEDH, el qual proclama, com sabem, els drets a la llibertat d’expressió i d’informació en uns termes força semblants als continguts en el nostre text constitucional. Cal emfatitzar, en qualsevol cas, que les Sentències del TEDH referides a drets i llibertats com els que ara ens ocupen són acceptades com a una font interpretativa per part de les jurisdiccions constitucionals dels Estats signataris de la Convenció, i utilitzades sovint per interpretar l’abast dels drets reconeguts dins dels ordenaments nacionals. Clarament, aquesta és l’opció que segueix el nostre Tribunal Constitucional d’acord amb el que preveu l’article 10.2 CE. De manera que, en definitiva, el recurs a la jurisprudència del TEDH permet aplicar un estàndard unificat europeu de protecció a drets i llibertats reconeguts per la Constitució espanyola.

Reprenent doncs el fil de les presents consideracions, cal dir que el TEDH ha reconegut en diverses resolucions la responsabilitat social dels periodistes i els mitjans de comunicació a

què es feia referència en un paràgraf anterior, tot explicitant clarament els límits a l'exercici de la llibertat d'informació derivats dels deures mínims de respecte de les normes pròpies de la deontologia de la professió periodística:

*“La garantía que el artículo 10 ofrece a los periodistas en lo que se refiere a los informes sobre cuestiones de interés general, **está subordinada a la condición de que los interesados actúen de buena fe de manera que suministren informaciones exactas y dignas de crédito en el respeto de la deontología periodística**”* (Sentència de 21 de gener de 1999, *Fressoz i Roire contra França*).

Paral·lelament, a la Sentència de 20 de maig de 1999 (*Bladet Tromsø i Stensaas contra Noruega*), el Tribunal, després de recordar que des de sempre “*ha afirmado y defendido el papel esencial de perro guardián de la prensa en una sociedad democrática, en un gran número de asuntos relativos a la libertad de expresión en los que ha subrayado no solamente el derecho de la prensa a comunicar informaciones, sino también el del público a recibirlas. Haciendo esto, el Tribunal ha contribuido ampliamente a establecer las bases de los principios que rigen una prensa libre en el seno de la comunidad convencional y más allá*”; adverteix a continuació que el tractament informatiu d'un fet de gran transcendència o interès general “*no debería tener como consecuencia sustraer a los periódicos [llegeixi's mitjans de comunicació en general] bien a la **deontología fundamental de su profesión**, bien a la legislación sobre difamación*”.

Deontologia professional que, cal advertir-ho, no suposa l'exigència d'una absoluta uniformitat de comportament a tots els periodistes, sinó que habilita un cert espai per a l'apreciació lliure i la valoració i ponderació dels fets, les dades i les fonts a les quals es té accés. En aquest sentit, el Tribunal Constitucional espanyol sintetitza clarament i incorpora a les seves eines interpretatives, en la Sentència 170/1990, la doctrina del TEDH pel que fa a aquesta noció àmplia d'informació:

“La limitación del derecho a la información al relato puro, objetivo y aséptico de hechos no resulta constitucionalmente aceptable ni compatible con el pluralismo, la tolerancia y la mentalidad amplia, sin los cuales no hay ‘sociedad democrática’ (TEDH, caso Handyside, Sentencia 7 de diciembre de 1976, núm. 65), pues la divergencia subjetiva de opiniones forma parte de la estructura misma del aspecto institucional del derecho a la información. Como ha afirmado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Lingens (Sentencia 8 de julio de 1986), a la prensa

incumbe y es su misión publicar informaciones e ideas sobre las cuestiones que se discuten en el terreno político y en otros sectores de interés público, y el público tiene el derecho de recibirlas, por lo que no es aceptable la opinión ‘según la cual la prensa tiene la misión de divulgar las informaciones, pero su interpretación debe dejarse primordialmente al lector’ (núm. 41).

El derecho fundamental reconocido en el art. 20 C. E., no puede restringirse a la comunicación objetiva y aséptica de hechos, sino que incluye también la investigación de la causación de hechos, la formulación de hipótesis posibles en relación con esa causación, la valoración probabilística de esas hipótesis y la formulación de conjeturas sobre esa posible causación. Exigiendo la presentación pura de meros hechos, la Sentencia del Tribunal Supremo ha limitado, indebidamente, ‘el abanico de informaciones accesibles a los lectores, resultado contrario a uno de los objetivos de una sociedad democrática (Tribunal Europeo de Derechos Humanos, caso Barthold, Sentencia de 25 de marzo de 1985, núm. 53)’.

En aquesta mateixa línia de reflexió és evident, i caldrà aprofundir en aquesta qüestió més endavant, que el deure de veracitat reiteradament esmentat no impedeix als mitjans de comunicació privats d'establir la seva pròpia línia editorial, i sobre la base d'aquesta, adoptar una determinada posició o formular algunes opinions en relació amb la informació objecte de comunicació. El límit constitucional de la veracitat informativa en cap cas pot considerar-se un impediment en aquest sentit, sinó una exigència directament aplicable a la manera com es divulga allò que es presenta com a informació.

Tal com ja s'ha assenyalat anteriorment, es una tasca pròpia del Consell de l'Audiovisual de Catalunya la de garantir el lliure exercici de la llibertat d'informació.

Això inclou, d'una banda, l'articulació de tots aquells mitjans que siguin necessaris per tal de garantir als professionals de la informació i als mitjans pels quals treballen, la màxima llibertat en l'exercici de la seva tasca. La protecció dels diferents prestadors de serveis audiovisuals, així com l'afavoriment d'un context de màxima diversitat i pluralisme, constitueix una de les missions principals que cal, doncs, atribuir al Consell.

Així mateix, és igualment una competència clara del Consell la relativa a garantir que la ciutadania tingui un adequat accés al conjunt d'informacions que són difoses pels mitjans de comunicació, així com el fet que aquestes se cenyeixin als límits constitucionals que han estat objecte d'anàlisi fins ara. Com hem vist, l'adequat compliment d'aquesta funció no suposa

només una tutela de l'autonomia dels individus (ja siguin emissors o receptors d'informació), sinó que és igualment un factor clau pel que fa a l'efectiva vigència del principi democràtic.

Així doncs, cal verificar, arribats a aquest punt, si alguns continguts objecte d'aquest Acord respecten el règim constitucional de la llibertat d'informació dins la complexitat i amplitud d'aspectes que, com hem vist, presenta.

A aquests efectes, cal dir que s'han seleccionat un seguit de frases i comentaris pronunciats durant l'emissió dels programes *La mañana* i *La linterna*. Sens perjudici, tal com s'ha advertit a l'apartat anterior, que es tracti de frases que es produeixen en un context en què informació i opinió se *solapen* o es presten a confusió amb gran facilitat, s'ha seguit aquí la doctrina consolidada del Tribunal Constitucional, la qual imposa l'obligació d'atendre quin és l'element preponderant en cada cas.

En la mesura que en els supòsits seleccionats el conductor del programa presenta a l'audiència quelcom que té la plena aparença de fets reals i contrastats, vinculats a temes i problemes d'actualitat i d'interès general, sembla clar que l'anàlisi d'aquests talls de veu s'ha de dur a terme, ara com ara, des del prisma de l'exercici d'activitats informatives i els seus límits constitucionals.

En primer lloc, cal citar els talls de veu en què s'assenyala que hi ha una col·laboració estreta entre el partit polític Esquerra Republicana de Catalunya (en endavant, ERC) i l'organització terrorista ETA. Es tracta dels talls de veu números 4, 5, 6, 7 i 8, els quals assenyalen:

“ERC está compuesta por terroristas sin arrepentir. Y éstos, a su vez, tienen un entorno, criminal, del que siempre se han nutrido, al que cultivan, al que miman, de donde vienen.”

“(...) un partido abiertamente antiespañol, ofensivamente antiespañol y escandalosamente separatista. Y además, amigo de la ETA, socio de la ETA, cómplice de la ETA”.

(en referència al secretari general del partit, senyor Carod Rovira) “la ETA manda en Roviretxe, Roviretxe no manda en la ETA”.

I també “Roviretxe, que es el socio de la ETA en Perpiñán (...) ¡pero si son los de Perpiñán! ¡Si son los que han pactado que ETA mate en una parte de España y en otra no!”.

(en referència al diputat senyor Tardà) *“El senyor Tardà, que gusta de señalar y apuntar a determinadas personas dentro del estilo de los camisas negras, como las que lleva la gente de Esquerra en el Parlamento”*.

És clar que les esmentades frases s’orienten a posar en coneixement dels oients els següents fets:

- ERC està integrada, en un nombre significatiu, per persones condemnades per Sentència ferma per la comissió de delictes relacionats amb el terrorisme.
- Les esmentades persones continuen duent a terme, en data d’avui, l’assenyalada activitat delictiva (seria el cas del senyor Tardà) o, com a mínim, estarien disposades a dur-la a terme en qualsevol moment en la mesura que la consideren plenament legítima.
- Hi ha una relació d’íntima col·laboració entre l’organització terrorista ETA i ERC fins al punt que els principals dirigents del partit obeeixen les instruccions que provenen de la banda armada, i participen com a còmplices en les seves activitats delictives.
- ETA i ERC han acordat una treva pel que fa a la comissió de determinats delictes per part d’ETA.

Aquestes asseveracions no han estat formulades, fins on arriba la informació de què disposa el Consell, per cap altre mitjà de comunicació. Així mateix, posen en coneixement de l’opinió pública uns fets que, d’una banda, no eren coneguts per part de la ciutadania fins a l’actualitat i, de l’altra, revesteixen una gravetat i unes conseqüències molt greus en cas que fossin certs (per exemple, aquesta certesa obligaria, en aplicació de la legislació vigent en matèria de partits polítics, a la il·legalització judicial d’ERC, així com a la detenció de bona part dels seus dirigents per pertinença o col·laboració amb banda armada).

Tot l’anterior posa en relleu que la divulgació o la narració del que acabem d’assenyalar no només exigia d’una tasca intensa i acurada de comprovació dels fets en qüestió, sinó que aquesta divulgació s’hauria d’acompanyar d’elements, proves o indicis raonables que permetessin sustentar-los públicament.

Res d'això consta que hagi succeït. Els responsables dels programes radiofònics en qüestió s'han limitat a proclamar de manera alarmant aquests fets sense donar constància de cap investigació periodística o de cap feina prèvia d'indagació diligent orientada a contrastar-los com cal.

Aquesta manca d'acreditació total de la informació que es presenta només pot dur el Consell de l'Audiovisual de Catalunya a una conclusió: ens trobem davant de la presentació com a fets de quelcom que no és res més que la mera voluntat de descrèdit públic de tercers sobre la base de gravíssimes acusacions que no han estat objecte de la més mínima comprovació o verificació d'acord amb les normes de comportament exigibles a qualsevol professional de la informació. En conseqüència, ens trobem davant d'allò que el Tribunal Constitucional ha caracteritzat com *“la transmisión de suposiciones, meras invenciones, insinuaciones insidiosas, o noticias gratuitas e infundadas cuando la información pueda suponer descrédito ajeno”* (STC 190/1996, tot recollint una doctrina consolidada en Sentències prèvies com les 6/1988, 171/1990 i 139/1995); i, per tant, davant d'informacions que ultrapassen el límit constitucional de la veracitat per situar-se fora de l'esfera de protecció de la nostra norma fonamental.

El rebuig i la il·legimitat d'aquesta modalitat de comunicació també podríem trobar-lo de forma clara en la jurisprudència del TEDH, el qual entén desproveïda de protecció, perquè se situa fora de l'exercici de la llibertat d'informació en el marc d'una societat democràtica, la difusió d'aquelles notícies que no compleixen amb un mínim rigor periodístic i s'orientin a perjudicar la reputació de tercers:

*“En una sociedad democrática, raras son las historias importantes o que merecen la protección del artículo 10 del Convenio hasta el punto de que se puedan sacrificar los principios fundamentales de la deontología -que obligan sobre todo a los periodistas a verificar los hechos antes de publicar una historia en tales circunstancias ante el beneficio comercial que procurará una exclusiva sensacional inmediata. No estamos convencidos de que en este caso la actitud del Tribunal, que libera al periódico demandante de esta exigencia elemental, haga verdaderamente progresar la causa de la libertad de prensa ya que mina el respeto a los principios deontológicos a los que los medios de comunicación se adhieren por su propia voluntad. **El artículo 10 puede proteger el derecho de la prensa a exagerar y a provocar, pero no a pisotear la reputación de los individuos**”* (Sentència de 20 de maig de 1999, *Bladet Tromsø i Stensaas contra Noruega*)

D'altra banda, i des de una idèntica perspectiva de verificació del respecte dels límits constitucionals a la llibertat d'informació, cal fer referència a un altre conjunt de fragments seleccionats als efectes d'aquest Acord.

Així, cal transcriure de nou els talls de veu número 1 i 2:

“(...) en Catalunya se está amenazando de muerte a quien critica la política de la Generalitat”

(en referència al grau de llibertat i convivència pacífica que existeix a Catalunya, i concretament en relació amb les reaccions que generen els posicionaments públics contraris al nacionalisme i, de forma general, a la política del Govern de Catalunya) “en Catalunya (...) a tiro limpio con el que les lleva la contraria”.

Aquests talls incorren, segons el parer del Consell, en la mateixa problemàtica que el conjunt que acabem d'analitzar. És clar que es posa de manifest la suposada existència d'una situació social especialment greu, com seria la coerció generalitzada d'aquells qui difonen públicament algun tipus de crítiques a les polítiques o als partits que integren al Govern. Més concretament, s'informa sobre l'ús habitual d'armes de foc en aquests casos (aquest és clarament el significat de l'expressió *a tiro limpio*).

La manca evident de tota constatació diligent d'aquests fets ens porta de nou a concloure que ens trobem davant d'insinuacions amb aparença d'informació contrastada, orientades a generar el descrèdit de les institucions catalanes, així com a projectar una imatge completament deformada del clima social que es viu en aquest país.

Per tot l'exposat, el Consell es veu obligat a concloure que també en aquest supòsit s'han ultrapassat els límits del legítim exercici del dret fonamental consagrat a l'article 20.1.d) CE.

Finalment, cal fer referència a una última sèrie de fragments de talls de veu, que corresponen concretament al número 3:

*“El nuevo Estatuto catalán tiene un fuerte color **imperialista**, hasta el punto de que, como quedó demostrado el domingo, Cataluña se reserva el derecho de anexionarse las partes de España en las que, según los nacionalistas catalanes, se habla catalán. Valencia y las Baleares serían así para los nacionalistas catalanes lo mismo que para el nacionalista **Adolf Hitler** eran Austria y Checoslovaquia.”*

“El nuevo Estatuto catalán significa el final de la Constitución y las libertades democráticas para sustituirlas por un régimen nacional socialista.”

*“El nuevo Estatuto catalán establece un derecho de veto sobre las decisiones del Parlamento español de tal manera que **España quedará convertida en una colonia de los nacionalistas catalanes**. (...) En otras palabras, España será con respecto a Cataluña lo mismo que el Líbano con relación a Francia antes de la II Guerra Mundial, una colonia, un simple protectorado.”*

*“El nuevo Estatuto catalán establece una verdadera **dictadura económica** de Cataluña sobre el resto de **España**, a la que convierte en el **mercado tercermundista** de sus productos.”*

Aquestes asseveracions tenen la clara voluntat no ja només d'expressar una legítima opinió crítica en relació amb la proposta d'Estatut aprovada pel Parlament de Catalunya el 30 de setembre de 2005, sinó informar la ciutadania sobre el contingut i les conseqüències jurídiques de la seva entrada vigor. Dins d'aquest marc s'inclouen afirmacions com ara la previsió de l'annexió de territoris de parla catalana, la imposició de les decisions de les institucions catalanes en relació amb les institucions públiques espanyoles, i el que és més greu, s'adverteix que l'entrada en vigor de l'Estatut ha de suposar l'automàtica derogació de la Constitució espanyola, així com la instauració a Catalunya d'un règim de tall totalitari en què les llibertats dels ciutadans s'eliminarien. En aquest darrer sentit, es parla de la voluntat d'establir un règim polític idèntic a l'instaurat per Adolf Hitler a Alemanya els anys 30 del segle passat, en l'origen del qual es troba una política d'expansió imperialista que dóna lloc a la Segona Guerra Mundial, i el major genocidi de la història moderna.

No correspon al Consell clarificar el contingut i les conseqüències jurídiques de l'aprovació de la proposta d'Estatut en la seva redacció actual. Això no obstant, no sembla agosarat dir que la interpretació i les conclusions que s'expressen per part del locutor es desvien de qualsevol anàlisi jurídica mínimament rigorosa, com les que –de signe divers i amb conclusions per cert no sempre coincidents– han anat apareixent en els mitjans de comunicació al llarg dels darrers mesos, o fins i tot han estat objecte d'elaboració per part

d'institucions com ara el Consell Consultiu de la Generalitat. Atribuir a la proposta, en un to que presenta, segons el parer del Consell, una clara aparença d'informació unes conseqüències tan greus com ara l'eradicació no ja de la Constitució, sinó del sistema democràtic i de llibertats a Catalunya, requeria una mínima justificació o fonament. Una formulació tan contundent com poc argumentada comporta la propagació d'una informació absolutament incontrastada i mancada de veracitat en relació amb quelcom de gran importància en el marc del funcionament de les institucions democràtiques i el desenvolupament del sistema autonòmic, de tal forma que la lliure formació de l'opinió pública en relació amb aquesta transcendental matèria queda seriosament compromesa.

Aquesta manca de veracitat en una qüestió de la referida rellevància en el marc del normal funcionament del sistema democràtic porta el Consell de l'Audiovisual de Catalunya a concloure, pel que fa als citats fragments, que ens trobem davant d'una extralimitació molt greu, per part dels professionals en qüestió, de l'exercici de la llibertat d'informació.

SISÈ.- L'ABAST DEL RECONeixEMENT DE LA LLIBERTAT D'EXPRESSIÓ PER LA CONSTITUCIÓ. TRANSGRESSIÓ DELS SEUS LÍMITS PER PART D'ALGUNS DELS CONTINGUTS DIFOSOS ALS PROGRAMES LA MAÑANA I LA LINTERNA DIFOSOS PER LES SOCIETATS CONCESSIONÀRIES A QUI ES DIRIGEIX AQUEST ACORD.

L'article 20.1.a) CE reconeix el dret a la llibertat d'expressió, el qual inclouria l'expressió i la difusió *“de pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción”*.

Juntament amb el dret a la llibertat d'informació, ens trobem davant d'una peça central del nostre sistema de llibertats, així com amb un element clau i determinant del bon funcionament del sistema democràtic. Tal com ja s'ha pogut deduir del que s'ha assenyalat fins aquí, sense una comunicació lliure (la qual inclou tant la lliure expressió com la lliure informació), esdevé impossible entendre vigent el principi democràtic consagrat a l'article 1.1 CE.

Sense pretensió d'exhaustivitat, cal recordar que aquesta connexió entre l'article 20 CE, també pel que fa a la llibertat d'expressió, i la contribució a la formació d'una opinió pública lliure com a eix central de funcionament del sistema democràtic, ha estat destacada per part del Tribunal Constitucional en una jurisprudència consolidada que arrenca ja de les seves primeres Sentències:

*“El artículo 20.1 de la Constitución dice, como es sabido, que se reconocen y protegen los derechos de ‘(...) expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción’. Se ha señalado acertadamente que se trata ante todo de un **derecho de libertad, por lo que básicamente significa ausencia de interferencias o de intromisiones de las autoridades estatales en el proceso de comunicación.** Sin embargo, en otro plano significa el reconocimiento y la garantía de una **institución política fundamental, que es la opinión pública libre, indisolublemente ligada con el pluralismo político, que es un valor fundamental y un requisito del funcionamiento del Estado democrático.** El art. 20 defiende la libertad en la formación y en el desarrollo de la opinión pública, pues la libertad en la expresión de ideas y los pensamientos y en la difusión de noticias es necesaria premisa de la opinión pública libre”. (STC 12/1982)*

Cal reiterar aquí, d'altra banda, les diferències existents entre l'exercici de la llibertat d'informació i la llibertat d'expressió, en la mesura que ambdues llibertats cobreixen àmbits o modalitats diferents de la comunicació. Aquestes diferències són especialment rellevants, tal com també ha estat apuntat ja, en la mesura que suposen l'aplicació d'un règim jurídic constitucional diferent en cada cas, en especial pel que fa als límits exigibles.

En aquest sentit, resulta especialment clar el recordatori que porta a terme la STC 204/1997:

*“Los pensamientos, ideas, opiniones o juicios de valor, a diferencia de lo que ocurre con los hechos, **no se prestan, por su naturaleza abstracta, a una demostración de su exactitud y ello hace que al que ejercitar la libertad de expresión no le sea exigible la prueba de la verdad o diligencia en su averiguación, y, por tanto, respecto del ejercicio de la libertad de expresión no opera el límite interno de veracidad** (por todas, STC 107/1988). En concreto, por lo que se refiere a los límites de la crítica, como manifestación de la libertad de expresión y opinión, es doctrina reiterada la de que **el ejercicio de la libertad de expresión -también el del derecho a la información- no puede justificar sin más el empleo de expresiones o apelativos insultantes, injuriosos o vejatorios que exceden del derecho de crítica y son claramente atentatorias para la honorabilidad de aquel cuyo comportamiento o manifestaciones se critican, incluso si se trata de persona con relevancia pública, pues la Constitución no reconoce el derecho al insulto**”*

Com podem veure, d'una banda, és clar que el dret a la llibertat d'expressió no pot, en principi, trobar el seu límit en la veracitat d'allò que es comunica, en la mesura que les idees, opinions i judicis de valor, si bé poden referir-se a fets reals, presenten una naturalesa abstracta i estrictament subjectiva, que fa inaplicables els tests de veracitat i diligència i deontologia professional que són, en canvi, procedents en relació amb l'exercici d'activitats informatives. D'altra banda, sembla clar que, pel que fa als mitjans de comunicació propietat de subjectes privats, l'exercici d'aquest dret a la lliure opinió es troba directament vinculat –i dóna, en conseqüència, cobertura constitucional– a la coneguda noció de *línia editorial*. És a dir, als termes en què els corresponents responsables dels continguts del mitjà decideixen el tipus de contribució que es fa en relació amb el debat públic i plural d'idees, pensaments i opinions, a través del qual, al seu torn, es formarà el que anomenem *opinió pública lliure*.

També, doncs, des d'aquest punt de vista, és clar que els mitjans de comunicació juguen un paper fonamental susceptible d'especial tutela, promoció i protecció per part dels poders públics, i en particular per part d'institucions com ara el Consell: no només permeten l'efectiu exercici, en la seva vessant estrictament subjectiva, de la llibertat d'expressió de subjectes individuals, sinó que, així mateix, constitueixen una peça clau en l'efectiva existència d'un veritable pluralisme polític, pressupòsit necessari, segons s'ha insistit reiteradament, de la vigència del principi democràtic.

Més concretament, és necessari deixar molt clar que a través de la formulació d'una línia editorial profundament arrelada en les fermes conviccions d'aquells qui tenen la propietat i el control de les diferents emissores que integren la cadena, el conjunt de l'entramat d'emissores vinculades al distintiu comercial COPE ha contribuït de manera decisiva a la construcció d'un espai públic de comunicació especialment lliure i plural⁶. És evident, en aquest sentit, que COPE recull en el si de la seva línia editorial les conviccions i les idees d'una part representativa dels ciutadans de Catalunya i d'Espanya, de manera que ha esdevingut un actor

⁶ Aquest ideari, concretament, fou aprovat pel Ple de la Conferència Episcopal Espanyola en data 26 d'abril de 1991, i es troba a [disposició](http://disposicio) a la pàgina web www.cope.es/paginas/ideario.asp.

i una veu imprescindible en qualsevol debat públic a l'entorn de qüestions fonamentals del funcionament del nostre sistema polític-constitucional.

En la mesura que és la clara i manifesta voluntat del Consell garantir aquesta presència i contribució de la COPE d'ara en endavant, s'entén necessari posar de manifest que en la difusió d'una sèrie de concrets continguts, i de manera força recent, s'han ultrapassat els límits que necessàriament existeixen, en un sistema constitucional de drets i llibertats, en relació amb l'exercici de la llibertat d'expressió. Es tracta doncs, tal com s'ha fet en l'apartat anterior, de recordar i advertir de cara al futur quins serien els esmentats límits, així com de la necessitat, d'origen constitucional, de respectar-los.

Abans d'entrar específicament en la concreta matèria objecte d'aquest Acord, val la pena fer alguna referència general a quins són els límits constitucionals a l'exercici de la llibertat d'expressió.

Tal com es desprèn de la Sentència del Tribunal Constitucional darrerament transcrita, el respecte de l'honor de les persones constitueix un clar límit a l'exercici de la lliure comunicació d'idees, pensaments o opinions, fins i tot en aquells casos en què es tracti de persones la tasca i responsabilitat de les quals les situï en una posició d'especial *visibilitat* dins l'espai públic. Afectaria, en aquest sentit, l'honor de les persones, en tot cas, la utilització de qualificacions o apel·latius insultants o vexatoris, els quals ultrapassarien els límits de qualsevol dret de crítica. En aquest sentit, el Tribunal Constitucional ha reiterat de manera molt clara que la utilització dels esmentats qualificatius, apel·latius, o el simple recurs a l'insult és il·legítima en termes constitucionals, en la mesura que són recursos innecessaris per difondre informació o per expressar opinions, així com, especialment, constitueixen un dany injustificat en un dels drets fonamentals de què tot individu és titular com és el dret a l'honor. En aquesta línia, no cal oblidar que el reconeixement constitucional de l'esmentat dret, contingut a l'article 18 de la Norma Fonamental, es troba molt vinculat a la protecció de la pròpia dignitat de les persones, proclamada constitucionalment a l'article 10.1:

*“No cabe duda que la emisión de **apelativos formalmente injuriosos en cualquier contexto, innecesarios para la labor informativa o de formación de la opinión** que se realice supone un daño injustificado a la dignidad de las personas o al prestigio de*

las instituciones, teniendo en cuenta que la Constitución no reconoce un pretendido derecho al insulto, que sería por lo demás incompatible con la dignidad de la persona que se proclama en el artículo 10.1 del Texto Fundamental” (STC 105/1990).

Podem veure, així mateix, com el Tribunal Constitucional admet també que els atacs a l'honor i la dignitat de determinades persones no són legítims només per afectar l'esmentada esfera de protecció constitucional dels individus, sinó també perquè afecten el prestigi de les institucions que aquests poden representar. Caldrà tornar sobre aquesta qüestió més endavant.

És necessari emfatitzar ara quelcom que ja ha estat apuntat en algun punt anterior: la transcendència o rellevància pública de les persones, si bé es cert que les situa en una posició particularment exposada a crítiques que, malgrat la seva intensitat, poden trobar aixopluc en l'article 20 de la Constitució, no legitima constitucionalment qualsevol apel·latiu que s'hi dirigeixi en contra. El Tribunal Constitucional ha recollit de forma inequívoca aquesta doctrina, la qual, d'altra banda, troba també un punt de referència destacat en la famosa Sentència del TEDH de 23 d'abril de 1992 (*Castells contra Espanya*):

“Igualmente ha declarado (STC 105/1990, F.8) cómo la crítica de una conducta que se estima comprobada de un personaje público puede ciertamente resultar penosa – y a veces extremadamente penosa – para éste, pero en un sistema inspirado en los valores democráticos, la sujeción a esa crítica es parte inseparable de todo cargo de relevancia pública. Pero no debe olvidarse que igualmente ha declarado que, en caso de invocación de la libertad de expresión, la concesión del amparo depende de que, en la manifestación de la idea u opinión se hayan añadido o no expresiones injuriosas desprovistas de interés público e innecesarias a la esencialidad del pensamiento o formalmente injuriosas (por todas, STC 107/1998). Por lo demás, esta doctrina ha sido recientemente avalada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante TEDH) en la Sentencia Castells de 23 de abril de 1992 en la que, tras afirmarse que la libertad de discusión política no tiene un carácter absoluto y que los límites de la crítica admisible son más amplios cuando se dirige contra el Gobierno que cuando recae sobre un particular, incluso si se trata de un político, explícitamente se reconoce que ello no impide que las autoridades estatales competentes “ puedan adoptar medidas, incluso penales, dirigidas a reaccionar de modo adecuado y no excesivo frente a imputaciones difamatorias desprovistas de fundamento o formuladas de mala fe.” (STC 190/1992)

Seguint amb el fil de l'esmentada Sentència, el Tribunal Constitucional declara també que el retret d'il·legitimitat constitucional de determinades opinions pot tenir el seu origen no només en el fet d'afectar el dret fonamental a l'honor de les persones, sinó que pot ser igualment determinant la circumstància que les opinions en qüestió s'hagin basat en l'assumpció com a certs o com a reals de fets en cap moment contrastats. Així, com es pot comprovar, malgrat la distinció entre el règim constitucional de la informació i el de l'expressió, l'Alt Tribunal no deixa de ser conscient dels lligams que sovint hi ha entre ambdues activitats i la necessitat, en conseqüència, d'incorporar, en certa mesura, el test de la veracitat a l'àmbit dels límits de la llibertat d'expressió:

*“La innecesariadad de tan graves imputaciones a personas concretas, que **por el simple hecho de ser políticos no dejan de ser titulares del derecho al honor, unida a la completa falta de fundamento de las mismas, hacen que dichas imputaciones no puedan ampararse en el derecho a la libertad de expresión.** Por todo ello, no cabe tampoco apreciar vulneración de este derecho (...) por haber proferido unas **frases infamantes desprovistas de fundamento que excedían claramente del amplio marco reconocido en nuestro sistema constitucional a las libertades de expresión y de crítica política**”.*

En aquest mateix sentit, el TEDH declara el següent a la seva Sentència de 29 de març de 2005 (*Ukrainian Media Group contra Ucraïna*):

*“Sin embargo, **incluso cuando una afirmación constituye un juicio de valor, la proporcionalidad de la injerencia podría depender de si existe o no una base de hechos suficientes** que sustenten la afirmación objeto de litigio. Cuando se la compara con los hechos que rodean a un asunto en concreto, **la afirmación que constituye un juicio de valor, podría resultar excesiva, si no existiera un hecho que la sustentara**”.*

Finalment, cal advertir que, d'acord amb la doctrina constitucional, fins i tot en aquells casos en què pugui arribar-se a acreditar que els fets sobre la base dels quals es construeix i es formula l'opinió de què es tracti són certs, això no legitima que el professional de la informació o el ciutadà pugui ultrapassar els límits constitucionals pel que fa a l'honor i la dignitat de les persones:

“Ahora bien, y sentado lo anterior respecto a determinadas opiniones del Sr. García referentes a la actuación del Sr. Roca en cuanto a la percepción de dietas, queda otra

*cuestión a resolver, habida cuenta, tanto de los razonamientos de la Sentencia que se impugna, como de las alegaciones del Ministerio Fiscal: esto es, si, aparte de tales opiniones, el Sr. García emitió otros **juicios, sin relación con la información ofrecida, y que pretendían, independientemente de ella, vejear la imagen y la dignidad del Sr. Roca, en forma innecesaria y gratuita en relación con esa información.** Pues, ciertamente, **una cosa es efectuar una evaluación personal, por desfavorable que sea, de una conducta** (evaluación que se inserta en el derecho de libre expresión, y que es a veces de difícil o imposible separación de la mera información) y **otra cosa muy distinta es emitir expresiones, afirmaciones, o calificativos claramente vejatorios desvinculados de esa información, y que resultan proferidos, gratuitamente, sin justificación alguna, en cuyo caso cabe que nos hallemos ante la mera descalificación, o incluso el insulto y sin la menor relación con la formación de una opinión pública libre.***

Pues bien, de la transcripción que obra en autos de la emisión del Sr. García, se desprende que éste empleó numerosas expresiones claramente ofensivas, innecesarias para la información que transmitía, e inútilmente vejatorias para el Sr. Roca, que versaban sobre sus supuestos defectos físicos ('lo de Pedrusquito lo he dicho en muchísimas ocasiones, es tan sólo un apelativo cariñoso que identifica sus escasos centímetros, su poco pelo y su nulo talante'; 'ni ve y no es por las cataratas...' 'Pedrusquito Catarata Roca...'), sobre su valía moral ('vil vasallo de Pablo Porta...' 'impresentable Presidente de la Federación Española de Fútbol') o sobre su capacidad intelectual ('ni oye, ni sabe, ni quiere, ni puede...' 'el tío no sabe de nada y sabe de todo. Bien').

Todo este conjunto de epítetos y afirmaciones, sin relación alguna con el lema del programa, constituyen sin duda insultos en el más estricto sentido de la expresión, y no tienen nada que ver con la crítica, por dura que sea, de una conducta, sino que aparecen como meras exteriorizaciones de sentimientos personales ajenos a la información sobre hechos o a la formación de una opinión pública responsable. Se colocan por tanto, fuera del ámbito constitucionalmente protegido de la libre expresión, y representan en consecuencia la privación, a una persona (investida de autoridad, y con ocasión del ejercicio de sus funciones) de su honor y reputación al ser vejada verbalmente en un medio de gran audiencia, por supuestos defectos físicos, morales o intelectuales; sacrificio éste que no se ve justificado por la defensa de ningún bien constitucionalmente protegido y que, en cambio, y a la vista de los arts. 10.1, y 18 del a Constitución lesiona derechos constitucionalmente protegidos del destinatario de tales expresiones insultantes." (STC 105/1990)

És evident, doncs, per tot l'exposat, que la llibertat d'expressió troba els seus límits en el respecte de l'honor i la dignitat de les persones i, indirectament, així mateix, en aquells casos en què l'expressió d'idees i opinions tingui com a punt de partida la consideració de determinats fets, en la seva adequada i diligent verificació.

Així doncs, i fins i tot en aquell supòsit en què hom pogués considerar que els fragments dels continguts objecte d'anàlisi en l'epígraf anterior entren prioritàriament dins l'àmbit de

l'expressió o l'opinió, enfront del de la informació –malgrat, com s'ha insistit, l'evident aparença d'informació que ja s'ha vist que presentaven–, és clar que, en qualsevol cas, les consideracions efectuades en el marc del present epígraf esdevindrien així mateix aplicables a bona part d'aquests, i seria per tant necessari entendre, des del punt de vista ara utilitzat, la seva il·legitimitat en termes constitucionals.

En aquest darrer sentit, és particularment evident que l'atribució a un seguit de persones o fins i tot al conjunt d'un partit polític –institució essencial i bàsica del funcionament del nostre sistema democràtic– de les gravíssimes acusacions de terrorisme –o de complicitat amb el terrorisme– transcrits més amunt constituïria un atac a la seva dignitat i honor, constitucionalment inadmissible. No podem oblidar, pel que fa als atacs dirigits a ERC com a partit polític i literalment transcrits en el seu moment, que el Tribunal Constitucional ha declarat expressament l'exigència del respecte de l'honor de les persones jurídiques també com a límit a l'exercici de la llibertat d'expressió:

*“En consecuencia, dada la propia sistemática constitucional, **el significado del derecho al honor ni puede ni debe excluir de su ámbito de protección a las personas jurídicas.** Bien es cierto que este derecho fundamental se encuentra en íntima conexión originaria con la dignidad de la persona que proclama el art. 10.1 CE. Pero ello no obsta para que formativamente se sitúe en el contexto del art. 18 CE. Resulta evidente, pues, que, **a través de los fines para los que cada persona jurídica privada ha sido creada, puede establecerse un ámbito de protección de su propia identidad y en dos sentidos distintos: tanto para proteger su identidad cuando desarrolla sus fines como para proteger las condiciones de ejercicio de su identidad, bajo las que recaería el derecho al honor.** En tanto que ello es así, la persona jurídica también puede ver lesionado su derecho al honor a través de la divulgación de hechos concernientes a su entidad, cuando la difame o la haga desmerecer en la consideración ajena.”* (STC 139/1995)

Abans d'entrar, a partir d'aquí, en l'anàlisi d'altres fragments de determinats programes del conjunt d'emissores COPE des de la perspectiva o d'acord amb els paràmetres referits en el marc del present epígraf, és necessari fer un específic recordatori de les competències del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.

En aquest sentit, és evident que la tutela de l'honor dels individus correspon, de manera directa, als Tribunals –parlem, en essència, de l'ordre jurisdiccional civil i penal. I és

igualment evident que, d'acord amb el nostre sistema jurídic, aquesta tutela s'articula generalment a instàncies de l'afectat. Dit això, és igualment clar que el Consell ostenta la competència necessària per verificar si determinats continguts audiovisuals han ultrapassat els límits constitucionals de reiterada referència.

Segons l'article 1.2 de la Llei 2/2000, de 4 de maig, del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, i com hem vist ja, correspon a aquesta institució vetllar pel respecte dels drets fonamentals dins l'àmbit de la comunicació audiovisual, tot garantint el compliment de la normativa reguladora aplicable –tal com d'altra banda es reitera de manera més específica al llarg de l'article 10 de la Llei–, així com de les condicions previstes al corresponent títol habilitant. És clar, doncs, que en la mesura que no només estem analitzant aquí el grau de respecte, per part d'un mitjà de comunicació, dels límits de l'exercici dels drets constitucionals consagrats a l'article 20 CE, sinó que a banda s'està analitzant igualment el grau de compliment del règim jurídic aplicable a emissores que funcionen en règim de concessió o contracte de gestió de servei públic –el qual inclou, com s'ha indicat ja, el necessari respecte, precisament, dels límits a què s'acaba de fer referència–, la competència del Consell per a l'anàlisi anunciada és indiscutible.

En tot cas, ha de quedar clar que el Consell no pretén atribuir-se competències que corresponen a l'Administració de Justícia. Sens perjudici que tots aquells que hagin vist afectat el seu honor en cada cas puguin exercir, de forma individual i paral·lela, les accions judicials que creguin convenient, l'activitat del Consell s'orienta a verificar el correcte exercici –és a dir, dins dels seus límits– dels drets fonamentals en l'àmbit de la comunicació, i d'acord igualment amb la normativa infraconstitucional que li és aplicable, per part d'un determinat mitjà. Dit de manera més àmplia, i d'acord amb el que preveu l'article 10.d) de la Llei 2/2000, la competència del Consell consistent a vetllar per l'adequació dels continguts audiovisuals al règim jurídic constitucional i administratiu que els resulta aplicable, no s'orienta només a tutelar la posició jurídica individual dels diferents operadors i de cadascun dels oients i els espectadors, sinó que es troba directament vinculada a l'òptim servei de l'interès general. Interès general que es concreta en la garantia de l'existència d'un sistema o d'un espai públic audiovisual de caràcter obert, plural i divers, el qual contribueix de manera eficient i adequada a la correcta i lliure formació de l'opinió pública. En definitiva, doncs, que

la tasca del Consell a què s'està fent referència aquí consisteix, en darrera instància, i d'acord amb allò que preveu la seva Llei reguladora, a vetllar per l'adequat funcionament d'un dels elements clau per al correcte funcionament del sistema democràtic.

Dit tot l'anterior, entrem ara en l'anàlisi dels diferents talls de veu que, segons el parer del Consell, serien el fruit d'un exercici de la llibertat d'expressió més enllà dels límits constitucionalment permesos:

Es tracta dels talls de veu número 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, i 24:

“Es que (és) una casta (la classe política catalana) dirigente, corrompida y corruptora, que gobierna de espaldas al pueblo, y no expresa en absoluto ninguna necesidad, ninguna voluntad de la gente corriente de Cataluña”

*“Pero la gente normal de Cataluña vive absolutamente de espaldas a esta **casta cleptocrática, esta casta separatista y esta casta que engaña a la gente**. Y cuando digo casta, me refiero a casta, no es ni siquiera una clase social, primero porque tienen poca clase y luego porque operan como una secta, como una casta.”*

*“Es una **casta** pues como en el tercer mundo, cleptocrática, iluminada...”*

*“Por eso cuando se llenan la boca ¡Cataluña ha dicho!. No, hombre no, la **casta dirigente nacionalista** de Cataluña, que tiene absolutamente **fuera de la libertad política y de la democracia real a la población**, ha decidido. La población de Cataluña no piensa lo que piensa Mas o Roviretxe o Maragall. Ni mucho menos. (...) Es un Estatuto hecho a espaldas del pueblo, por una clase política y mediática que tiene la caradura que cuando se hunde el Carmelo decir que es culpa de la corrupción y luego tapar el hundimiento del Carmelo y además la corrupción. (...) Ayer qué espectáculo la prensa de Barcelona. Bueno, ya saben que ocultaron a los lectores, La Vanguardia y El Periódico, que habían puesto el termino nación como artículo primero. Lo ocultaron, lo ocultaron, los dos. (...) ¡Pero es que eso es una **dictadura**, hombre!. Ayer diciendo: no se puede tolerar que algunos medios critiquen a la clase política o periodística catalana... ¡Pero si os criticáis vosotros solos! ¡Si dais pena! Bueno, pena, no, pena da la gente de Cataluña. ¿No se puede tolerar? ¿Y qué vais a hacer, vais a mandar a la Brunete o qué?*

*“No podemos aceptar que la **oligarquía nacionalista** decida desgajar un trozo de España para convertirlo en su **cortijo**. No podemos claudicar ante la idea de que un pequeño grupo de **políticos borrachos de poder** digan al resto de España lo que tiene que ser y lo que tiene que hacer.”*

*“(...) A mí me recuerda leyendo el **Estatuto**, muchísimo a la Italia de **Mussolini**, extraordinariamente.”*

“(...) Al señor **Tardà**, al que le gusta jugar al **gran inquisidor** y de vez en cuando señala autores concretos a los que hay que censurar. Lo cual demuestra que en el fondo es un **verdadero fascista**, porque realmente no se puede denominar de otra manera a quien se dedica a censurar al prójimo. Se empieza señalando autores, como él ha hecho en el Congreso en más de una ocasión, y después se pasa a quemar los libros en una pila. Y ésa, desgraciadamente, es la táctica del señor Tardà (...) Y lo que no puede pretender, porque eso es **fascismo puro**, es que lo que decidan los nacionalistas catalanes tiene que ser un trágala que acepten el resto de los españoles. (...) Pero eso **no es democrático**, eso es digno de la **tradición histórica de ERC**”.

“Bueno, lo del señor Iceta es de un complejo de inferioridad disfrazado de superioridad digno de algún partido de **camisas pardas** del periodo de entreguerras. Son esas afirmaciones de superioridad, de nacionalismo canijo desprovisto de raíces históricas que encima, se lo acaba creyendo. Es como cuando **el matón de la clase** de pronto decide que es el más guapo, el más alto y el más valiente de todos, claro **hasta que le inflan el resto de los compañeros**. Pero efectivamente ésta es la idea. No, a Cataluña no la tenemos miedo. Nunca la hemos tenido miedo, entre otras cosas porque es una parte de España a la que queremos entrañablemente. Y los nacionalistas catalanes, miedo tampoco nos inspiran, ahora, los sentimientos que nos producen posiblemente son todavía menos positivos.”

“Ah, también le atizaron a Endesa y al PP a propósito de la OPA, porque La Caja, La Caixa no tiene nada que ver en la OPA, no, solamente es la dueña de Gas Natural... solamente... ¡Pero es que encima nos toman por imbéciles! Vamos a ver si se entera el señor Fornesa, **que como es muy mayor a lo mejor no se enteró**, y mira que se lo explicó bien Mariano Rajoy...”

“Qué **vergüenza**, qué **asco**, qué **bochorno**, qué **nauseas** producen estos tíos. Cada uno de ellos, estos tíos del PSOE, sus socios, los **separatistas**, etc., representan a todos los españoles, no representan a su distrito, a todos los españoles. Y a estos tíos les da igual que a 11 muchachos los mandaran a morir (els morts al foc de Guadalajara), les da igual porque son españoles de tercera; mejor dicho, porque son españoles, y por lo tanto, ciudadanos de tercera.”

“Era absolutamente imprevisible que una colección de **gente tan poco letrada** y en algunos casos **analfabetos funcionales** llegaran a **ministros**.”

“(...) el preámbulo lo ha hecho un **distinguido bobo llamado Rubert de Ventós**, que es el **intelectual que tiene en la mesilla de noche Maragall**. Y claro, con esta **colección de analfabetos**, que **no tienen ni idea de historia ni respeto por los demás**, pues claro, pasa lo que pasa...”

“Por supuesto esta campaña contra la COPE que adquiere en Cataluña niveles grotescos, es una cosa verdaderamente... en fin, a mí me divierten. Es que **estos idiotas**, además piensan que, cuando a uno le insultan (y a mí me insultan todos los días, pero bueno, así al por mayor), pero si es que a mí me divierte mucho ver a los malos excitados contra mí me produce un gran placer espiritual. Digo “mira, mira, como atacan los malos... debo estar haciendo algo bien”. O sea que sigue Montilla, que me complace, y sigue Rubalcaba, que me encanta oírte.”

*“Porque yo no sé si **Montilla quiere fundar otra vez el GAL** – él es del partido de Filesa y del GAL—**para matar periodistas incómodos o van a montar otra vez la máquina como lo del vídeo de Pedro J.**”*

*“La historia del socialismo español desde Pablo Iglesias hasta el 13-M es la apoteosis del **golpe de estado permanente.**”*

*“Muy posiblemente el mayor logro de Felipe González como secretario general del PSOE fue arrancarlo del dogmatismo marxista y arrastrarlo hacia **posiciones semejantes a la del partido social-demócrata alemán.** Y es que la **historia del Partido Socialista** es una de las más **sinistras** de la contemporaneidad española. Y es que, a lo largo de casi un siglo, se caracterizó casi siempre por la **lucha contra los sistemas parlamentarios**, por la **falta de respeto hacia la legalidad**, por el **apoyo al golpismo** y por un **sectarismo totalitario.**”*

El contrast de les expressions que es contenen en els fragments seleccionats, els quals, un cop més, es corresponen amb continguts difosos, respectivament, pels senyors Jiménez Losantos i Vidal a *La mañana* i *La linterna*, amb la doctrina que es desprèn de la jurisprudència constitucional citada seria suficient per entendre que ens troben davant de clares vulneracions a l'honor de les persones, de partits polítics i fins i tot d'atacs il·legítics al prestigi de determinades institucions.

En aquest sentit, si intentem fer un esforç de síntesi i sistematització, podem trobar els següents elements:

- Desqualificacions greus i atemptatòries a l'honor, dignitat i reputació de les persones en la mesura que suposen l'atribució d'activitats i comportaments delictius: “*casta dirigente corrompida y corruptora*”, “*Montilla quiere fundar otra vez el GAL (...) para matar periodistas incómodos*”, “*la historia del socialismo español (...) es la apoteosis del golpe de Estado permanente*”, “*[el PSOE] se caracterizó siempre por la lucha contra los sistemas parlamentarios, por la falta de respeto hacia la legalidad, por el apoyo al golpismo y por un sectarismo totalitario*”.

- Desqualificacions o apel·latius que de forma clara entren dins del terreny de l'insult: “*matón de la clase*”, “*gente tan poco letrada*”, “*analfabetos funcionales*”, “*colección de analfabetos*”.

[dirigit als assessors del president de la Generalitat en la confecció de la proposta de l'Estatut]"
"estos idiotas [essencialment dirigit als senyors Montilla i Rubalcaba]".

- Vexacions públiques vinculades a circumstàncies físiques o de salut de les persones: "(...) *el señor Fornesa, que como es muy mayor a lo mejor no se enteró*".

- Afirmacions gratuïtes dirigides a denigrar públicament la imatge de determinats personatges públics, especialment polítics: "*Al señor Tardà, al que le gusta jugar al gran inquisidor (...). Lo cual demuestra que en el fondo es un verdadero fascista (...)*", "*distinguido bobo llamado Rubert de Ventós*".

- Afirmacions dirigides al desmereixement públic de partits polítics: "*qué vergüenza, qué asco, qué bochorno, qué náuseas producen estos tíos. Cada uno de ellos, estos tíos del PSOE, sus socios, los separatistas, etc., (...)*", "*la historia del socialismo español es la apoteosis del golpe de Estado permanente*", "*y es que la historia del Partido Socialista es una de las más siniestras de la contemporaneidad española*", "*eso no es democrático, eso es digno de la tradición histórica de ERC*".

- Afirmacions que denigren i que s'orienten a desacreditar el prestigi dels dirigents polítics, i en definitiva, les institucions d'autogovern de Catalunya: "*esta casta cleptocrática, esta casta separatista, y esta casta que engaña a la gente*", "*la casta dirigente nacionalista de Catalua, que tiene absolutamente fuera de la libertad política y de la democracia real a la población (...)*", "*¡pero es que esto es una dictadura, hombre!*", "*no podemos aceptar que la oligarquía nacionalista (de Catalunya) decida desgajar un trozo de España para convertirlo en su cortijo. No podemos claudicar ante la idea de que un pequeño grupo de políticos borrachos de poder*", "*(...) a mí me recuerda leyendo el Estatuto, muchísimo a la Italia de Mussolini, extraordinariamente*".

Sembla prou clar que ens trobem davant d'evidents exemples d'exercici extralimitat de la llibertat d'expressió, que entra clarament en la il·legítima vulneració de l'honor i la dignitat de persones físiques i jurídiques, així com en l'atac al prestigi d'institucions fonamentals del nostre sistema constitucional. Tal com ja hem vist en un apartat anterior, la gravetat d'aquesta

vulneració rauria, així mateix, en el fet que part d'aquests pronunciaments públics prendrien com a base o punt de referència l'assumpció d'uns fets absolutament incontrastats i, en definitiva, aliens a qualsevol requisit de veracitat.

Cal insistir ara que el Consell no podrà mai oposar-se a l'exercici de la crítica, especialment quan aquesta es dirigeix a la forma com els assumptes públics són gestionats pels responsables polítics i les institucions corresponents. Es tracta d'una de les parts nuclears del dret a la llibertat d'expressió, i la seva existència és imprescindible en el marc de qualsevol societat democràtica.

Dit això, no resulta, però, admissible, la mera denigració pública, la propagació del descrèdit o, en definitiva, l'insult dirigit a persones, partits, empreses o entitats, o fins i tot a institucions. L'opinió, fins i tot, aquella que consisteix en una crítica esmolada, intensa i implacable, no necessita, per a la seva comunicació, d'altres formes d'expressió l'objectiu de les quals no és ja la transmissió d'idees i pensaments, sinó que es dirigeix de forma directa a provocar en el públic receptor els esmentats efectes de descrèdit, vexació o denigració. Tal com ha estat àmpliament argumentat, el nostre sistema de drets i llibertats (tant a l'àmbit estatal, com d'acord amb els instruments normatiu i la jurisprudència europea dictada en la matèria) no donarien cabuda, dins la llibertat d'informació i d'expressió, a aquest tipus d'activitats.

Cal dir també que aquesta activitat denigrant o vexatòria a què fem referència resulta particularment greu a la vista dels riscos que genera des del punt de vista de la convivència i la participació democràtica. No podem oblidar que bona part de les expressions que han estat objecte de rebuig per part del Consell s'orienten clarament a crear un estat o opinió pública d'animadversió envers representants democràtics dels ciutadans espanyols (o d'una part d'aquests), així com a donar una imatge denigrada de les institucions catalanes d'autogovern, del seu funcionament, i dels partits que les integren. Com és evident, aquest és un atac que afecta molt frontalment la formació de l'opinió pública en relació amb qüestions que es troben molt directament vinculades al funcionament del nostre sistema polític i al desenvolupament de l'Estat autonòmic (peça clau, no cal oblidar-ho, del model polític dissenyat pel constituent l'any 1978).

És per tot l'anterior que el Consell ha de manifestar, un cop més, que no només ha tingut lloc un exercici il·legítim per part de les entitats a qui es dirigeix el present Acord, dels seus drets fonamentals dins l'àmbit de la comunicació, sinó que és igualment evident que l'esmentada extralimitació presenta una molt especial gravetat.

Per tot l'exposat, el Ple del Consell Audiovisual de Catalunya, **ACORDA:**

PRIMER.- Considerar que Radio Popular, Sociedad Anónima; Ràdio 13 de Catalunya, Societat Anònima; Sociedad Editorial Catalana de Radio y Televisión, Sociedad Anónima; i Ràdio Puigcerdà, Societat Limitada, com a entitats comercials concessionàries del servei de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència, i en els termes expressats en la fonamentació d'aquest Acord, han incorregut en una vulneració dels límits constitucionals a l'exercici legítim dels drets fonamentals a la llibertat d'informació i d'expressió, la qual cosa suposa un incompliment greu del règim concessional al qual les esmentades entitats es troben sotmeses.

SEGON.- Advertir a Radio Popular, Sociedad Anónima; Ràdio 13 de Catalunya, Societat Anònima; Sociedad Editorial Catalana de Radio y Televisión, Sociedad Anònima; i Ràdio Puigcerdà, Societat Limitada, com a entitats comercials concessionàries del servei de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència, que el present Acord constata un incompliment de les obligacions que els corresponen com a concessionàries als efectes d'allò que preveu l'article 11, lletra j), del Decret 269/1998, de 21 d'octubre, del règim jurídic de les concessions per a la prestació del servei de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència per a emissores comercials, en relació amb l'article 6, lletra h), del mateix Decret.

TERCER.- Posar aquest Acord en coneixement del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, així com notificar-lo a Radio Popular, Sociedad Anónima; Ràdio 13 de Catalunya, Societat Anònima; Sociedad Editorial Catalana de Radio y Televisión, Sociedad Anónima; i Ràdio Puigcerdà, Societat Limitada i als altres interessats que figuren en l'expedient, i procedir a la seva difusió pública.

QUART.- Comunicar aquest Acord al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, com a Administració competent en relació amb el règim concessional de la prestació del servei de radiodifusió sonora en ona mitjana per part de Radio Popular, Sociedad Anónima., als efectes del que preveu la lletra n) de l'article 10 de la Llei 2/2000, de 4 de maig, del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.

Barcelona, 19 de desembre de 2005

Josep M. Carbonell i Abelló
President

Antoni Bayona Rocamora
Conseller secretari